

EL PROBLEMA PENAL

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº DE ORDEN	3113
UBICACION	E. 62
FICHA MATERIA	

RODOLFO MORENO



EL PROBLEMA PENAL



BUENOS AIRES

TALLERES GRÁFICOS ARGENTINOS L. J. ROSSO - DOBLAS 951

1933

*Es propiedad.
Queda hecho el depósito
según marca la ley.*



Al Doctor EUSEBIO GOMEZ





LA OPINION PUBLICA Y LAS SANCIONES LEGISLATIVAS



La opinión pública considerada como un consenso general respecto a personas, cosas o ideas, se forma de diferentes maneras. A veces, generalmente cuando un acontecimiento notable tiene lugar, se unifica de pronto coincidiendo las gentes en el juicio, en la apreciación de las consecuencias o en las medidas a tomarse. Cuando los hechos producidos son de percepción más lenta, o de penetración menos rápida lo mismo que cuando se requiere una observación más detenida para apreciarlos, a causa de la complejidad de los fenómenos, la opinión pública no se concreta de manera repentista, siendo la corriente de más difícil elaboración y de factura más reposada.

Si los elementos de juicio proporcionan antecedentes contradictorios y si las expresiones individuales, técnicas o vulgares, son diversas la opinión no se uniforma y sobreviene eso que se llama desorientación. Esta suele ser tan frecuente como perjudicial siendo característica en las



épocas y en los momentos de anarquía. La desorientación que supone falta de rumbo dirigente suscita la desconfianza e impide el progreso en todos los órdenes. La expectativa que significa estancamiento paraliza actividades cuando se prolonga y llega hasta detener la vida misma en una sociedad.

El juicio colectivo no se forma siempre a base de la observación directa, sino también y con verdadera generalidad, como consecuencia de la repetición interesada de determinadas afirmaciones. En todos los fenómenos de la vida social, la propaganda, para la cual hay verdaderos maestros, surte efectos decisivos y procura éxitos o tropiezos y hasta en las materias que parecerían más extrañas a su influencia, el factor hace sentir su importancia y gravita con mayor o menor fuerza de convicción y arrastre.

Los fenómenos psicológicos y los sociales se influyen recíprocamente, son los mismos en todas partes y pesan con sus antecedentes y consecuencias en lo grande y en lo chico, en lo individual y en lo colectivo.

Los actos antes de su ejecución están en la mente de sus autores. Por eso cuando se trata de fenómenos sociales antes de producirse los mismos suele haber una conciencia que siendo general provoca estados, de optimismo o pesimismo, de confianza o desconfianza, preparando acciones que se traducen en beneficios o en perjuicios.

La opinión pública en definitiva se puede formar sola, a base de la observación general, se puede formar como consecuencia de propagandas sinceras que expliquen hechos y los comenten con veracidad y se puede formar



por acción tendenciosa que difunda, exagere la verdad y comente con persistencia en un sentido determinado para inclinar a la mayoría a pensar de la manera que se proponen los que están empeñados en tal tarea.

En las cuestiones más sencillas la opinión suele orientarse sola porque apreciándose los hechos y sus consecuencias con clara percepción, no se necesita ni el consejero ni el técnico. En las cuestiones menos simples, en los asuntos científicos sobre todo, es fácil llegar a juicios colectivos falsos cuando los maestros o los que se dicen tales difunden afirmaciones inexactas y respaldados en la cátedra o en la autoridad lanzan desde arriba palabras olímpicas que impresionan y crean la convicción general.

Hay problemas técnicos que sólo interesan a cierta clase de estudiosos y cuyas discusiones no pasan a la masa popular porque se necesita para deliberar y aun para entender la concurrencia de conocimientos especiales. Hay otros asuntos que si bien, cuando se despejan son de importancia práctica, se desenvuelven durante la preparación en la zona de la especialidad y sólo se presentan al público cuando están resueltos para que se aprovechen los beneficios. Y hay también cuestiones, de carácter social siempre, que si bien se estudian, se afrontan y se dirimen por obra de legisladores la aplicación interesa a todos desde que se destinan al conjunto, que opina, se orienta y pesa con expresiones que a veces asumen el carácter de verdaderas manifestaciones de opinión.

Ocurre esto último con las leyes fundamentales que se ocupan de reglamentar los derechos individuales frente a los sociales. Las leyes siempre definen esas relaciones



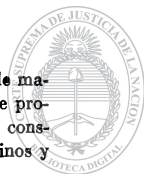
y crean o reconocen un equilibrio entre la persona y el conjunto, limitando las facultades de la primera en homenaje a la convivencia.

De esas leyes fundamentales la represiva es una de las más importantes desde que autoriza a limitar los derechos individuales más preciados y aun a suprimirlos para mantener la existencia misma de la sociedad. La ley penal es la ley defensiva por excelencia y los límites de su alcance están determinados por la precisión de esa defensa.

La ley penal interesa al conjunto, porque rige para todo habitante y cualesquiera puede a mérito de sus hechos o de sus omisiones caer dentro de sus preceptos y ver sancionada una restricción a sus derechos más fundamentales.

Pero la ley penal no es discutida por el público en su elaboración, sino en sus aplicaciones. Generalmente cuando se propone un proyecto sobre cuestiones obreras, concesiones particulares, obras públicas, fomento, colonización, o sea en general sobre actividades lícitas, muchos al suponer la posibilidad o la seguridad de ser alcanzados por sus disposiciones colaboran en la obra, discuten y propician movimientos de opinión. Y así notamos que cada vez que se ha hablado de jubilaciones a determinados gremios, de cajas de previsión, de reglamentaciones del trabajo y de otros problemas, los interesados han concretado sus aspiraciones y han bregado por su implantación o combatido contra los propósitos enunciados.

Lo mismo ocurre cuando las leyes procuran resolver problemas de carácter general desde que si bien no se



dirijen a un interés privado especial, contemplan de manera genérica los del conjunto. Y así vemos que se producen movimientos colectivos tendientes a que se construyan avenidas, habiliten paseos, pavimenten caminos y se ejecuten obras de fomento.

En cambio si se trata de leyes penales la opinión se manifiesta en oportunidades distintas. Cuando la ley se elabora con abstracción de sucesos y de personas, el público no se interesa en la gestación derivando probablemente esa indiferencia de la circunstancia de que nadie se quiere considerar sujeto pasible de sus sanciones. Pero cuando una ley penal se promulga y se producen crímenes extraordinarios, el mismo público indiferente se preocupa de considerar si esos hechos son o no el resultado de las leyes y si las mismas defienden insuficientemente a la sociedad.

En esta materia como en todas tienen lugar por otra parte, fenómenos iguales a los que ocurren en los demás planos de las actividades. Cuando la ley se proyecta, hay técnicos que tienen opiniones encontradas y como es natural triunfan en el articulado los principios de los unos sobre los postulados de los otros. En la cuestión quizás más debatida, la pena de muerte, por ejemplo, mientras algunos profesores, jueces y abogados sostienen que debe prodigarse, otros luchan por su abolición y otros aceptan lo que creen términos medios, consistentes en aplicaciones restringidas.

Y es claro, cuando la ley se sanciona quedan técnicos con sus teorías rechazadas, su amor propio herido y hasta con un deseo de revancha.



Cuando el público, a mérito de hechos notorios se preocupa de la ley penal y empieza a dudar del acierto de las disposiciones, que no son lo bastante enérgicas para contener e intimidar, los técnicos desalojados se incorporan al coro o procuran formarlo, arremetiendo contra aquello de lo que no pudieron ser inspiradores. Y se forma así o se trata de formar un ambiente y un concepto que poco a poco va gravitando hasta determinar la necesidad de reformas. De esa manera se procura el desprestigio de los que construyeron y se satisface un propósito hostil que no se confiesa, pero que se abriga.

Estamos en este momento experimentando la repetición de un fenómeno social producido en diferentes oportunidades aquí y en otras partes, creado tendenciosamente y abultado por muchos comentadores de buena fe a quienes podría observarse que no hay el derecho de embarcarse en campañas jurídicas sin tener del asunto un conocimiento siquiera superficial.

Los ataques dirigidos a la ley penal vigente tienden a destruir la reputación científica de los autores, ponen en duda su competencia y les echan encima la grave responsabilidad de haber dado al país estatutos perjudiciales. Las críticas no son personales, pero si fueran exactas demostrarían que faltó por lo menos capacidad y que quienes consiguieron en el Congreso la sanción de la reforma, no fueron dignos de la confianza dispensada entonces por la representación nacional. Por el prestigio de ese cuerpo, formado cuando se sancionó el Código por representantes de todos los partidos políticos argentinos, conviene, más que por motivos individuales, afron-

tar la discusión pública y científica del asunto, examinando al propio tiempo las características actuales y las nuevas necesidades.

Me propongo recordar lo que hizo el Congreso Argentino y porqué lo hizo, lo que dejó de hacer y en mi concepto también lo que le corresponde en esta hora de desorientación espiritual, de anarquía social y de separación hostil entre los hombres, aun entre aquellos que pertenecen a los mismos grupos y que aceptan el verbalismo de las disciplinas.





ELABORACION DEL CODIGO PENAL ARGENTINO

La sanción del Código Penal argentino no fué el resultado de la improvisación, de la ligereza o del impresionismo personal. Fué la consecuencia de largos estudios, de meditada elaboración y de consultas formuladas a profesores, magistrados y especialistas.

Conviene recordar algunos de los antecedentes, dada la generalizada inclinación a olvidar y a verificar afirmaciones sin tener en cuenta los hechos ocurridos, aún los más inmediatos.

El 17 de Julio de 1916 presenté a la Cámara de Diputados, de la cual formaba parte, un proyecto de modificaciones a la legislación penal entonces vigente. Para contar con el mayor concurso de técnicos, estudiosos y prácticos, preferí no hacer un proyecto nuevo en todas sus partes sino tomar como base para una consulta, el trabajo presentado en 1906 por la Comisión designada en 1904 por el P. E. de la Nación para que redactara un código.

Ese proyecto que tenía unidad, que había sido elaborado por personas competentes y que había sido bien





juzgado por la crítica, debía en mi concepto y de entrada sufrir modificaciones fundamentales y por eso no me limité a presentarlo como elemento para la encuesta que me proponía, sino que lo acompañé con un proyecto de modificaciones que sintetice en 29 artículos y a las cuales me referí en los fundamentos.

La Comisión que redactó ese Proyecto y que fué nombrada por el Presidente Quintana, siendo Ministro el Dr. Joaquín V. González, estuvo formada por los Dres. Diego Saavedra, Francisco J. Beazley, Rodolfo Rivarola, Cornelio Moyano Gacitua, Norberto Piñero y José María Ramos Mejía.

En los fundamentos referidos concreté las reformas principales las cuales se dirigían a los puntos siguientes:

1°. — Supresión del libro sobre “faltas” y de las palabras que al mismo se referían en los artículos del proyecto que las contenían;

2°. — Supresión de la pena de muerte, eliminando los preceptos que la consagraban y substituyendo esa pena por otra en los casos en que se imponía;

3°. — Mantenimiento de la mitad de las pensiones de ciertos condenados, cuando tuvieren familia y a beneficio de ésta;

4°. — Disminución del minimum en la penalidad del homicidio para dar mayor margen a los jueces;

5°. — Mantenimiento de la pena del código entonces vigente en el delito de disparo de arma de fuego, no aceptando la modificación del proyecto básico;

6°. — Penalidad de la agresión con toda arma, y no solamente con arma blanca;



7°. — Limitación de la pena, en los casos de alteración de estado civil, la que debería aplicarse solamente cuando hubo el propósito de causar un perjuicio;

8°. — Aumento de la penalidad en los delitos contra la honestidad, para concordarla con el criterio de las leyes entonces vigentes y dictadas para modificar el código en esa parte especialmente;

9°. — Derogación de la ley número 9143, que reprimía la trata de blancas, e incorporación al Código de los preceptos que encerraban provisiones no contenidas en aquél, a los efectos de la unificación y concordancia;

10°. — Derogación de la ley número 7029, llamada de seguridad social, e incorporación al Código, a los efectos indicados, de los hechos que aquella incriminaba y omitía el proyecto;

11°. — Derogación de la ley número 9077, sobre cheques dolosos, e incorporación en su lugar respectivo, de dos preceptos nuevos;

12°. — Derogación de las leyes anteriores, tanto federales como ordinarias, sobre materia represiva a los efectos de la unidad perseguida.

Para poner en movimiento la reforma, con fecha 10 de Agosto de 1916 me dirijí a todos los magistrados del fuero criminal, correccional y de instrucción del país, acompañando un ejemplar del proyecto de 1916 con su exposición de motivos, las modificaciones propuestas y los fundamentos que las acompañaron, pidiéndoles especialmente opinión sobre los puntos siguientes, concretando las preguntas así:



1º. — Que piensa sobre la reforma penal y su oportunidad;

2º. — Que opinión tiene sobre el proyecto que se acompaña; y

3º. — Que reformas cree oportuno introducirle, sobre todo las de carácter práctico impuestas por la experiencia.

Después de iniciada la encuesta y en la sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 20 de Setiembre de 1916, pedí se designase una comisión especial de legislación penal y carcelaria, para que estudiase los proyectos referentes a la materia y presentase sus despachos al año siguiente.

Fundé la proposición, haciendo notar la necesidad de la reforma y la iniciativa fué aceptada sobre tablas, nombrándose la Comisión que se constituyó bajo mi presidencia, con la Secretaría del Dr. Antonio de Tomaso y los vocales Dres. Gerónimo del Barco, Carlos M. Pradere y Sr. Delfor del Valle.

La Comisión inició su labor ratificando la encuesta, la cual se amplió dirigiéndose a los profesores de las universidades y a los Senadores y Diputados de la Nación. Esto último se hizo con el propósito de que los legisladores fueran penetrándose del trabajo en marcha y pudieran colaborar con la Comisión Especial haciéndole llegar sus observaciones. El proyecto con sus antecedentes, fué también mandado a los diarios para que la prensa pudiera expedirse por medio de sus redactores técnicos.

Puede así notarse que no se incurrió en omisiones, que no se preparó un anteproyecto en el silencio de un



gabinete o procurando imponer ideas personales, sino que se solicitó la opinión de magistrados, profesores, técnicos, periodistas y legisladores en general para el mayor éxito de la obra.

Si el concurso de respuestas y de colaboraciones no fué mayor, la culpa no puede atribuirse a quienes con todo empeño procuraron en su hora recibir el concurso de todos los que tenían capacidad, para contribuir al perfeccionamiento de la obra en marcha.

Recibidas las contestaciones, la Comisión Especial me encargó el estudio de las mismas y la redacción del proyecto definitivo, pero de acuerdo con sus propósitos de realizar una obra meditada y tranquila, resolvió también por mi iniciativa, requerir de cada uno de sus miembros opinión sobre los siguientes puntos:

- 1) Legislación de faltas;
¿Se debe incorporar al C. Penal la legislación de faltas?
- 2) Pena de muerte:
¿Debe mantenerse o no la pena de muerte?
- 3) Menores:
Responsabilidad de los menores. ¿Debían cambiarse o mantenerse los principios vigentes?
- 4) Individualización de las penas:
Si deben reducirse o no los mínimum de todas las penas del Proyecto, y si conviene dar a los jueces amplias facultades para fijar las mismas, apreciando con criterio propio las atenuantes y agravantes.



5) Reparación de perjuicios:

¿Conviene o no imponer siempre al juez la fijación del perjuicio?

Todo eso fué documentado en nota de fecha 7 de Octubre de 1916, dirigida por el Secretario de la Comisión a los miembros de la misma. El objeto de esta medida era perfectamente explicable. La Comisión había resuelto encargar a uno de sus miembros la redacción del anteproyecto y este necesitaba para articular conocer los puntos de vista de sus colegas acerca de puntos fundamentales. De otra manera se exponía a trabajar inútilmente. Por eso se requirieron de antemano esas opiniones y se solicitaron no en una reunión, sino por escrito, para que los puntos fueran estudiados y la respuesta pudiese tener la autoridad derivada del detenido examen.

En reunión posterior las opiniones fueron vertidas y fué posible en consecuencia redactar el proyecto, conociéndose previamente la manera de pensar de los componentes de aquella acerca de unas cuantas cuestiones fundamentales.

Con todo ese caudal de antecedentes brevemente recordados se produjo el despacho que tuve el honor de redactar, presentándose a la Cámara el 16 de Julio de 1917 no solo el proyecto sino una extensa exposición de motivos.

Debo hacer presente que durante la redacción consulté especialmente diversos puntos con los Dres. Rodolfo Rivarola, Eusebio Gómez, Tomás Jofré, Julio Herrera y Octavio González Roura, habiendo sido acompañado en el estudio de todas las cuestiones por el Dr. Antonio



de Tomaso, Secretario de la Comisión, el cual colaboró en la tarea con el mayor empeño.

La Cámara de Diputados después de ordenar la impresión del proyecto, fundamentos y antecedentes en edición especial para que la obra tuviese la mayor difusión posible, sancionó el mismo sin modificaciones en la sesión del 21 de Agosto de 1917, previo un informe oral que tuvo la satisfacción de producir y que se refirió a los puntos principales de la reforma.

El proyecto pasó al Senado donde se consideró cuidadosamente, habiéndose introducido modificaciones y complementado sus fundamentos con una extensa exposición de motivos, impresa también en especial edición con los antecedentes respectivos.

En esa Cámara el despacho de la Comisión fué suscripto por los Doctores Joaquín V. González, Enrique del Valle Iberlucea y Pedro A. Garro, habiendo hecho un estudio detenido el Dr. Angel Rojas.

En Setiembre de 1920 se aprobó tal proyecto que volvió a la cámara originaria, para que se pronunciase sobre las modificaciones y después de nuevas discusiones y pronunciamientos quedó convertido en ley para entrar en vigencia el 1º. de Abril de 1922.

La Comisión de la Cámara de Diputados que intervino en los detalles de la sanción definitiva, estuvo formada por los Dres. Roberto Parry, Laureano Landaburu, C. M. Pradere, Antonio de Tomaso y Señor Delfor Del Valle.

Se comprueba así que la sanción se produjo con un examen atento y con la intervención de distintos legis-



ladores que se informaron debidamente, discutieron sus respectivas ideas y le dieron al conjunto el peso de su autoridad.

El código, como toda obra nueva fué objeto de comentarios, ataques y defensas. Se escribieron libros, se publicaron artículos y se concretaron diversas críticas. Algunos de los que guardaron silencio durante la preparación, se desinteresaron de la obra o excusaron su examen, arremetieron contra la misma y apuntaron defectos que pudieron ser señalados en el periodo de elaboración, cuando todo aporte era objeto de examen por quienes intervenían en la redacción de la nueva ley.

Es que en esto como en todo es más fácil destruir que construir y pocos son los que se inclinan a contribuir al éxito de un trabajo que no han realizado por sí mismos.

Los que contemplaban desde afuera la aplicación del nuevo estatuto creyeron probablemente que debía producir de inmediato una disminución de la criminalidad, como si el código fuera un específico milagroso destinado a curar de raíz la enfermedad social del delito. Y como comprobaron que los crímenes se repetían, lo mismo que antes, empezaron a difundirse opiniones que propalaban el fracaso de la nueva ley.

Parte de nuestra prensa especialmente tomó al código de blanco para ensayar la puntería de sus armas. El periodista superficial, habituado a escribir sobre todo sin contar con una ilustración excepcional y preocupado de complacer a su público con comentarios ligeros, se encargó de formar el ambiente. Las instituciones modernas del código no eran objeto de atención, sus principios



civilizados y humanos tampoco, pero cada vez que un crimen impresionante se cometía, los censores se subían a la cátedra y desde las columnas de algunos diarios atacaban con el mayor empeño. Esa ley decían, es benigna, sentimental, absurda, se ha hecho sin tener en cuenta factores esenciales y ha provocado el incremento de la delincuencia.

La supresión de la pena de muerte se señalaba como el factor máximo y se bregaba por su restablecimiento como un medio salvador para contener la ola roja.

No se tenían en cuenta antecedentes, hechos, ni razonamientos. El asunto era buscar una explicación para el crimen en aparente aumento, tener base para una crítica y combatir una obra científica, seria y meditada que tenía el pecado capital de no haber salido de los estudios de los críticos ni de las redacciones de los observadores.

En el momento actual la crítica arrecia, las afirmaciones sobre la ineficacia de la ley son corrientes y la opinión que no examina concluye por creer que es necesario sancionar modificaciones fundamentales. En la crítica se confunden antecedentes, proyectos e ideas llegándose hasta sostener que la reforma debe rectificarse con las mismas instituciones complementarias que propusieron sus autores, pero no atribuyéndolas a estos, sino presentándolas como elementos adversos a los mismos.

Procuraré por todo eso, volver las cosas a su quicio y poner cada una en su lugar.



III

LAS LEYES COMPLEMENTARIAS DEL CÓDIGO PENAL



En el concepto corriente, la reforma penal iniciada en 1916 comprendía el código y nada más, de manera que las observaciones comunes se dirigen a éste, sin tener en cuenta otros elementos de juicio. El error en el punto de partida apareja múltiples equivocaciones que se manifiestan en cuanto se recuerdan los antecedentes completos de la cuestión. La reforma penal se planteó como un conjunto orgánico del cual el código fué el punto central que debía integrarse con las leyes complementarias. Cuando en la sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 20 de Setiembre de 1916, propuse la designación de una comisión especial de legislación penal y carcelaria, sostuve que debía encargársele el estudio de todos los proyectos sobre leyes represivas. El punto se discutió porque solicité especialmente que esa comisión se avocase al examen de los proyectos sobre expulsión de extranjeros y de esa opinión no participaron otros legisladores, pero sometida la decisión al voto de la Cámara ésta dispuso conforme a mi propuesta la designa-



ción de una comisión especial compuesta de cinco diputados, para estudiar todos los proyectos sobre legislación represiva, social y carcelaria. Debido a la controversia producida acerca de la extensión de atribuciones de esa comisión, debieron hacerse dos votaciones en particular enumerándose los proyectos ya presentados para resolverse, tal como lo propuse, que la ley sobre expulsión de extranjeros debía incluirse entre los asuntos sometidos al dictámen de la comisión, destinada al estudio de las leyes represivas y carcelarias.

El proyecto de código penal lo presenté en la sesión que tuvo lugar el 17 de Julio de 1916 y el de residencia y expulsión de extranjeros el 28 de Agosto del mismo año. Como en el proyecto de código penal se proponía la derogación de la ley número 7029, llamada de seguridad social y en los fundamentos se aludía a la inconstitucionalidad de la ley número 4114 o sea la de residencia, expresé que proyectaría en breve disposiciones tendientes a integrar el código defendiendo debidamente al país. Esa promesa se hizo efectiva con el proyecto presentado el 28 de Agosto de 1916 el cual espera sanción desde entonces, habiendo pasado ya diez y siete años.

El 11 de Setiembre de 1917 presenté a la consideración de la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre represión de la vagancia y mendicidad, el cual pasó a estudio de la comisión especial de legislación penal y carcelaria sin obtenerse despacho. Tal proyecto fué reproducido en el año 1919.

Mi periodo de diputado terminó en Abril de 1920 y durante ese año y el de 1921 la Comisión Especial de



Legislación Penal y Carcelaria, que había caducado, se renovó por iniciativa del diputado Parry. Electo de nuevo por el periodo 1922-1926 me propuse trabajar por la sanción de las leyes complementarias del código, el cual había salido de la Cámara de Diputados, pero permanecía en el Senado pendiente de estudio. El 6 de Julio de 1922 reproduje los proyectos sobre residencia y expulsión de extranjeros y represión de la vagancia y mendicidad, y en la sesión de la misma fecha presenté nuevos proyectos acerca de creación del registro nacional de reincidencia, patronato de liberados, construcciones carcelarias y sistema carcelario.

En la sesión mencionada propuse también se autorizara a la presidencia para designar una comisión especial compuesta de cinco miembros, que estudiase los proyectos sobre legislación penal y carcelaria y presentase los despachos correspondientes. Esa comisión debería también proyectar un código de procedimientos en lo criminal, para la Capital y Territorios Nacionales.

En la sesión del 12 de Julio de 1922 fundé el proyecto de resolución, tendiente a que se organizara de nuevo la comisión especial empleando conceptos y señalando circunstancias que son de plena actualidad.

Expresé entre otras cosas lo que se transcribe a continuación.

“La formación de esa comisión en este momento es, “a mi juicio, indispensable, y entiendo que tiene el parlamento, en sus dos ramas legislativas, comprometida una opinión respecto a la necesidad de sancionar las “leyes complementarias del código penal; y me va a



“ permitir la honorable cámara, por la importancia ins-
titucional que este asunto tiene, que le tome unos
“ cuantos minutos de tiempo para decir por qué razón
“ he manifestado que está comprometida la opinión del
“ parlamento”.

“ Cuando se sancionó el código penal, aceptando el
“ proyecto de la comisión especial y los fundamentos
“ de la misma que le sirvieron de informe, se recordó
“ que en esos fundamentos se había establecido terminan-
“ temente que el código penal se ocupaba sólo de enu-
“ merar las penas y de establecer cuáles correspondían a
“ los delitos previstos por la misma y que una ley car-
“ celaria posterior fijaría el régimen de la penalidad, o
“ sea la forma como habían de cumplirse en la práctica
“ esas penas. El código penal, al proceder así, había recti-
“ ficado el sistema de la ley anterior, había rectificado el
“ sistema de los proyectos anteriores, también, y había
“ aceptado el antecedente inmediato del proyecto de 1906,
“ que distinguía entre código penal y leyes complemen-
“ tarias”.

“ Dije en otras oportunidades que el código penal
“ era una ley destinada a ser aplicada por los jueces,
“ que terminaba en su gravitación con la conclusión del
“ proceso: si había absolución, porque el acusado era
“ reintegrado a la vida libre, salvo los casos excepcio-
“ nales de reclusión por enfermedades mentales; y si
“ había condena, porque inmediatamente después de eje-
“ cutoriada la sentencia en que se establecía la pena pri-
“ vativa de la libertad, el condenado era entregado a la
“ autoridad administrativa encargada de hacerla cumplir.



“De manera que la vigencia del código penal termina
“donde debe empezar la gravitación de la ley que fije
“el régimen a que deben ser sometidos los condenados”.

“Como la ley carcelaria no se ha dictado, es indis-
“pensable que la comisión especial que redactó el código
“penal concluya su tarea”.

“Además, señor presidente, en el código penal hay
“una serie de disposiciones que no se aplicarán bien,
“y que algunos jueces yendo más lejos entienden que
“no se pueden aplicar si no se dictan leyes complemen-
“tarias. Así la ley ha creado la institución de la condena
“condicional; también la institución de la libertad con-
“dicional; pero ha establecido que ninguno de estos be-
“neficios se pueden acordar a los reincidentes. La rein-
“cidencia es, por otra parte, una circunstancia genérica
“agravante de la penalidad y es también una circunstan-
“cia específica que determina condenas agravadas y es-
“peciales, en los casos que la ley fija. De manera que
“para poder aplicar el código y sus instituciones básicas,
“es indispensable comprobar la reincidencia, y hoy no
“existen ni medios, ni órganos adecuados para llegar a
“esa finalidad. Luego, también, es necesario dictar a
“esos efectos una ley complementaria que permita la
“comprobación de aquélla”.

“Por último, señor presidente, para complementar
“el mismo código penal es necesario resolver el problema
“carcelario en los hechos. Es sabido que no solamente
“en las provincias, sino aun en la nación, las cárceles
“son insuficientes, malsanas e inconvenientes, en todo
“sentido; y no se ha de resolver puramente con enun-



“ciados teóricos dentro de la ley penal el problema de la delincuencia, sino con leyes prácticas que tiendan a solventar los inconvenientes que se presentan en la lucha que la sociedad lleva a cabo contra el crimen. La construcción de cárceles y la transformación de las existentes se impone a fin de que se cumplan preceptos constitucionales y se someta a los penados a un régimen correccional”.

“Es preciso también complementar el código penal para que las instituciones de éste puedan aplicarse con eficacia, dictando una ley sobre patronato de liberados; y es, por último, necesario, como lo sostuvieron aquí los señores diputados Parry y de Tomaso, que se provea a la reforma de la legislación procesal. Y me bastará, señor presidente, para fundar la ampliación propuesta en el segundo punto del proyecto de que se ha dado lectura, referirme a simples circunstancias de hecho, bien conocidas. Generalmente todos los que se ocupan del régimen carcelario y aun de legislación penal de fondo, sostienen que es necesario proveer en materia represiva a dos finalidades: la primera consiste en defender a la sociedad contra el peligro del crimen; la segunda es procurar la corrección del delincuente. Pero los que desenvuelven esas ideas con carácter puramente teórico, consideran que el condenado sale de la vida libre a raíz de la comisión del delito para ser sometido al régimen de la prisión, durante el cual deben agotarse los procedimientos para tratar de devolverle de nuevo a la vida libre en las mejores condiciones que se pueda. En el hecho, con nuestra legislación procesal, eso no



“sucede, porque entre el momento de la comisión del
“delito y el momento en que el acusado, ya condenado,
“es sometido al régimen carcelario, transcurre ese pe-
“riodo que aquí en la Argentina es muy largo y que se
“llama en todas partes la prisión preventiva. Cuanto
“más largo es el periodo de la prisión preventiva, vale
“decir de duración del proceso, mayores son los incon-
“venientes que se presentan en el régimen carcelario para
“la corrección del condenado, porque no hay nada peor
“ni más funesto que ese intervalo de holganza en que el
“acusado está en una situación de duda, en que no se
“encuentra sometido a la disciplina carcelaria y en que
“caen sobre él todas las perversiones”.

“Es por eso, señor presidente, que es indispensable,
“si se quiere contar con verdaderos instrumentos de
“corrección respecto a la delincuencia, sancionar reformas
“procesales que permitan el desenvolvimiento de los
“procesos criminales con la mayor rapidez posible, a fin
“de resolver las situaciones de hecho, y a fin de que se
“pueda, como ocurre en algunos países de Europa, de-
“cidir rápidamente sobre la situación de duda en que se
“encuentra un hombre acusado de un hecho o de una
“omisión calificada de delito, y decidir si ha de ser puesto
“en libertad sin que la sociedad exija responsabilidad
“alguna, o si ha de ser sometido lo más inmediatamente
“posible al régimen de la prisión”.

“Es por estas consideraciones, señor presidente, y
“entendiendo que el congreso de la nación ya se ha
“pronunciado sobre la necesidad de estas leyes, que
“hago indicación para que se autorice a la presidencia



“ a los efectos de que nombre la comisión especial y se
“ le pasen a ella todos los proyectos relacionados con la
“ materia, autorizando también a esa comisión para que,
“ en el caso de no poder presentar sus despachos durante
“ las sesiones del corriente año, trabaje en el receso y
“ los presente en las primeras sesiones del año próximo”.

Hasta aquí la exposición que podría repetirse hoy sin cambiarse una sola palabra.

Para constituir la comisión fueron nombrados los diputados Quirós, Pradere, Parry, Anastasi, De Tomaso, Landaburu y Rodolfo Moreno, organizándose la misma bajo la presidencia del Dr. Roberto Parry y la Secretaría del Dr. Antonio de Tomaso.

Los proyectos presentados por mi parte caducaron y el año 1924 fueron reproducidos y enviados a la comisión, junto con otros de legisladores que también se habían ocupado de los mismos problemas.

Los antecedentes anotados demuestran que el Congreso si bien ha sancionado al código penal, ha omitido pronunciarse sobre los proyectos que lo complementan y que se refieren a los siguientes asuntos:

- Sistema carcelario
- Construcciones carcelarias
- Registro de reincidentes
- Expulsión de extranjeros
- Vagancia y mendicidad
- Patronato de liberados

Todos esos proyectos que fueron acompañados de extensos fundamentos, tendían a proporcionar la más

eficaz defensa social que debe perseguirse con las leyes represivas.

Es necesario ahora establecer la relación entre esos estatutos y el código penal, lo que acreditará también la precisión de sancionarlos.





LOS PROYECTOS

Sistema carcelario. — Los hechos aceptados desde la época de la organización, determinaban la conducta a seguirse en esta materia. Producida una acción o una omisión calificada de delito, los jueces se ocupan de juzgar al acusado y aplican, durante la sustanciación, el código de procedimientos y en la resolución el código penal, considerado durante la tramitación del proceso tan sólo *prima facie*. Si la justicia absuelve y salvo casos de excepción, el acusado vuelve a la vida libre y las leyes represivas han perdido todo influjo sobre el mismo.

Pero si el acusado es condenado debe ser entregado a la autoridad administrativa para el cumplimiento de la pena. Partiendo de esas bases, entendí que debían separarse los preceptos de la represión judicial de aquellos relativos a la ejecución administrativa y contarse con un código penal y una ley carcelaria. Esta última es indispensable no sólo porque es el estatuto destinado a decirle al poder administrador lo que debe hacer con los condenados, sino porque es el único que puede dar unidad a las penas en todo el territorio nacional.





Hoy, en defecto de la ley en cada provincia se cumplen las penas de manera diferente. Hay condenados a reclusión que se encuentran en las cárceles de encausados, hay procesados mezclados con condenados y existe en general una verdadera anarquía en la materia.

La falta de una autoridad federal que vigile el cumplimiento de las penas permite el desorden y la desigualdad, produciéndose el caso de delitos iguales y penas también exactas que se sancionan con reclusión, la cual se cumple en algunos casos en Ushuaia y en otros en prisiones locales. Esta falta de uniformidad, consecuencia de la carencia de la ley y de la vigilancia respectiva, permite favoritismos y diferencias que son perniciosas para la lucha en forma contra la delincuencia.

En cada provincia hay reglamentos diversos, en cada establecimiento de la Capital misma domina el suyo y todo eso provoca desórdenes de los cuales se tienen noticias llamativas de vez en cuando, ya sea en forma de evasiones o disturbios en los penales.

La ley reclamada no se sanciona sin embargo y los penalistas de ocasión piden elevación de castigos o sea provisión de más materiales para el desorden creciente.

Construcciones carcelarias. — La experiencia ha demostrado que las cárceles son la escuela de la delincuencia cuando se confunden los penados y no se verifican clasificaciones. Colocándose los condenados en montón y mezclándose con los procesados, se consigue que los más avezados en el crimen aleccionen a los novicios, los cuales después de su paso por el establecimiento penal se



han perfeccionado en el delito. Para que las cárceles no perviertan, es necesario entre otras muchas cosas, que los reclusos se clasifiquen. La primera distinción es la que debe hacerse entre procesados y condenados. Los primeros tienen a su favor una presunción de inocencia, siendo la prisión preventiva una medida de seguridad y no un anticipo de condena. Los segundos en cambio, son personas que han sido juzgadas y declaradas responsables de una infracción más o menos grave. Los procesados no pueden ser sometidos a más limitaciones que las derivadas del orden en los establecimientos de detención, ya que sus derechos fundamentales, salvo el de la libertad preventivamente restringida, no se encuentran alterados. Los penados por el contrario tienen o pueden tener sus actividades civiles restringidas y están sometidos a una sanción de culpabilidad.

Penados y procesados es elemental que no puedan, que no deban ser mezclados.

La existencia de distintos establecimientos para unos y otros es de todo punto indispensable.

Entre los penados y los condenados hay menores y mujeres. Razones obvias aconsejan la precisión de distintos establecimientos para varones y mujeres, y comprobaciones de la experiencia demuestran que es indispensable contar con sitios especiales para los menores. Estos tienen una mentalidad en formación, son salvo casos excepcionales de corrección más fácil que los mayores y están expuestos con mayor predisposición que aquellos a ser influídos por el ejemplo.



Entre mayores y menores hay además invertidos sexuales, enfermos y viciosos, que deben tenerse separados o en establecimientos especiales.

El código penal autoriza la reclusión en lugares también especiales de los enfermos mentales absueltos. Para hacer efectivo el precepto, es preciso contar con locales de seguridad.

Las penas de encierro consignadas en el código son dos: la reclusión y la prisión, correspondiendo la primera a los delincuentes más peligrosos. Una y otra deben cumplirse en establecimientos diferentes, donde estarán sometidos al régimen que establezcan la ley y los reglamentos internos. Las dos clases de condenados no pueden ser colocados en los mismos encierros, si se quieren cumplir los propósitos de la ley penal en vigor.

Quiere decir, conforme a lo expuesto, que se deben tener establecimientos distintos o secciones diferentes dentro de los mismos, para:

- Procesados varones mayores;
- Procesados varones menores;
- Procesadas mujeres menores;
- Procesadas mujeres mayores;
- Procesados alienados, varones, mujeres y menores de uno y otro sexo;
- Condenados varones mayores;
- Condenados varones menores;
- Mujeres mayores condenadas;
- Mujeres menores condenadas;
- Condenados alienados, varones, mujeres y menores de los dos sexos.



Agréguese a esto los enfermos, los viciosos y los invertidos sexuales, que no pueden juntarse con los demás encausados o condenados y se tendrá una idea de las necesidades que crea la represión.

El cuadro sin embargo no está completo desde que se requieren lugares para la simple detención y para los contraventores. Entre estos también son indispensables las clasificaciones teniéndose en cuenta sexos, edades y antecedentes. El reincidente, el vago, el mendigo, el vicioso, nunca podrían ser colocados juntos para el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, por causa contravencional.

Anotadas las necesidades, es preciso proveer a los medios de llenarlas, desde que si la ley contiene preceptos y en la práctica no pueden aplicarse por carencia de elementos, las previsiones del estatuto fallan y el sistema se reduce a una expresión de anhelos quebrada en los hechos.

El sistema federal de gobierno impone una política especial en esta materia.

En rigor, de acuerdo con los principios institucionales, cada provincia debía contar con los medios necesarios para cumplir las leyes fundamentales de la Nación y en ese concepto, en materia carcelaria, en cada estado particular y en cada territorio debería contarse por lo menos con lo siguiente:

Establecimiento o establecimientos para:

Detenidos;

Contraventores;

Procesados;



Condenados a prisión;
Condenados a reclusión;
Mujeres, procesadas y condenadas;
Menores; y
Alienados.

En cada uno de esos locales deberán hacerse las secciones necesarias y dentro de las mismas las clasificaciones entre las distintas clases de sujetos.

En la práctica eso no resulta posible, porque hay provincias que a causa de su reducida población y escasos recursos no pueden contar con los elementos anotados, ni siquiera en parte. Para esos casos se ha sancionado el principio del artículo 18 del código penal, el que necesita ser reglamentado y completado con preceptos tendientes a su cumplimiento, los que no pueden tener cabida sino en la ley sobre sistema carcelario y régimen de la penalidad. La dirección federal de establecimientos penales a crearse debería ocuparse de vigilar la uniformidad del sistema en su aplicación.

El Congreso, entre tanto, encargado de definir la situación de los penados nacionales, esto es, de los condenados por la justicia ordinaria de la Capital Federal, por la justicia federal de las Provincias y por la letrada de los territorios nacionales, tiene que resolver el problema de los establecimientos penales, a los cuales podrán o deberán también ingresar los condenados por la justicia ordinaria de las Provincias, dado lo preceptuado por el artículo 18 del Código Penal antes recordado.

Propuse en la Cámara, teniendo en cuenta la necesidad de solucionar el asunto sin recargar considerable-



mente las rentas generales, que se vendiesen los terrenos donde se encuentra emplazada la penitenciaría nacional de la calle Las Heras, para adquirir con los fondos emergentes, extensiones de terreno en la Provincia de Buenos Aires y fundar en las mismas colonias penales.

Tuve en cuenta circunstancias diversas. Cuando la penitenciaría nacional se estableció en el terreno que hoy ocupa — aproximadamente doce hectáreas — eso quedaba lejos de la parte poblada de la ciudad. Hoy se encuentra en pleno centro y la ubicación del penal que cierra calles al tráfico, causa perjuicios de toda índole. Además los precios de la tierra han subido considerablemente y hoy resulta la penitenciaría ocupando una propiedad de gran valor que podría rendir en caso de aprovechamiento ingentes beneficios. Para los sujetos encerrados, para las autoridades y para la seguridad general el emplazamiento de la cárcel en la ciudad o fuera de ella es una cuestión sin importancia.

El proyecto en cuestión, pendiente de consideración hace más de diez años, fué recibido con general asentimiento, pero la inercia ha podido más que el estímulo y la idea duerme en el cementerio parlamentario.

Registro de reincidentes. — Las leyes penales de todos los países civilizados se preocupan de combatir la reincidencia. Si bien cualquiera es capaz de cometer un crimen, la experiencia comprueba que los delitos de cierto tipo son generalmente consumados por la misma categoría de sujetos. Los atentados contra la propiedad son casi siempre la obra de profesionales, los que parecerían seguir



en la vía ilícita una verdadera carrera ascendente. De aquí que contra los individuos que delinquen por primera vez se tomen medidas de corrección o se les amenace con la aplicación de la pena sin hacerla efectiva y que contra los que repiten la infracción se agoten las precauciones.

El reincidente es casi siempre un sujeto peligroso contra el cual corresponden medidas especiales. En todas partes se llevan registros que consignan los nombres y demás particularidades de los que delinquen y cuando se produce un hecho y se acusa a un individuo, lo primero que se hace es averiguar sus antecedentes.

En muchos casos los policías avezados, cuando un delito se consuma y sus autores no aparecen, los buscan entre los profesionales catalogados en sus galerías, porque suponen que determinadas actividades deben ser la obra de sujetos conocidos.

La ley procesal permite en ciertos casos la excarcelación de los que por primera vez ejercitan un hecho calificado de delito, mientras dura la sustanciación del proceso y la ley penal autoriza la aplicación de la condena condicional a los que deben ser reprimidos por determinadas infracciones, siempre que no tengan antecedentes.

El código penal, además señala penas diferentes para un mismo delito, según cual sea el sujeto a quien debe aplicarse la represión, siendo distintos los castigos para los primerizos y los reincidentes en primero, segundo o más términos.



Todo esto impone la necesidad de tener en registros especiales la historia de cada uno de los sujetos que ha sufrido condenas.

Los registros actuales son de carácter local y no proporcionan sino informes limitados a la jurisdicción territorial del juzgado que entiende en la causa. En la Capital Federal se dan los antecedentes que el sujeto pueda haber tenido dentro de la misma y sólo en casos excepcionales se entregan otros. En estos casos la policía lo hace porque los ha reunido para su servicio, pero no porque existan leyes que así lo exijan. En la provincia de Buenos Aires los datos se otorgan con referencia a la actuación del sujeto en el departamento judicial, en el cual se le juzga o en todo el Estado y nada más. De manera que la defensa resulta así incompleta.

Un individuo que tenga antecedentes en el extranjero puede presentar aquí una foja limpia por falta de los elementos necesarios. Y un argentino o extranjero juzgado en una jurisdicción determinada puede aparecer sin antecedentes por el hecho de no tenerlos allí sino en otra parte.

La defensa social contra la delincuencia será incompleta mientras no se cuente con un registro nacional de reincidencia, en el cual se formen y conserven las fichas de todos los condenados.

En ese registro deberían archivar-se también las fichas correspondientes a extranjeros que viniesen al país después de haber sufrido alguna condenación y siempre, es claro, que la entrada se permita.



Expulsión de extranjeros. — La única ley con que cuenta el país en esta materia es la N°. 4114 llamada de residencia. Dicho estatuto autoriza al Poder Ejecutivo para expulsar extranjeros, sin proceso y sin sustanciación. Pero esa ley no tiene sanción para su incumplimiento, de manera que el extranjero expulsado si vuelve al país no recibe castigo alguno y todo lo que pudiera ocurrirle es que lo echen otra vez.

En su debida oportunidad vertí el juicio que esa ley me mereció, el cual mantengo en todas sus partes.

La ley N°. 7029 llamada de seguridad social, completó la de residencia y fijó una pena corporal para el expulsado que volviese al país violando la orden de extraniamiento.

La derogación de esa ley producida al sancionarse el código penal, ha dejado a la ley de residencia en las antiguas condiciones.

Han creído algunos observadores superficiales que la derogación de la ley N°. 7029 y las tachas formuladas contra la ley N°. 4114 tenían carácter sectario y tendían a dejar al país sin instrumentos de defensa, en el deseo de facilitar la acción de las tendencias avanzadas. Ese comentario que a fuerza de difundirse ha concluído por penetrar en algunos espíritus es ligero y mal intencionado.

La ley de residencia aparte de su notoria pugna con los preceptos más fundamentales de la Constitución es, aparte de su arbitrariedad, ineficaz para el objeto propuesto y susceptible de dar lugar a enormes injusticias. El abandono en su aplicación por parte de los gobiernos,



muestra también que las autoridades ejecutivas han coincidido con ese punto de vista.

Las deficiencias de la ley de residencia, saltan a la vista. Por medio de la misma, se autoriza al Poder Ejecutivo para ordenar la salida del territorio de la República a todo extranjero: a) que haya sido condenado por tribunales extranjeros, por crímenes o delitos comunes; b) que se encuentre perseguido por crímenes o delitos comunes por tribunales extranjeros; y c) que tenga una conducta que comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.

Además el P. E. podrá impedir la entrada de los extranjeros cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren las causales de expulsión mencionadas.

Decretada la expulsión por el P. E. sin formas de proceso, el extranjero alcanzado por la medida tendrá tres días para salir del país, pudiendo ordenarse como medida de seguridad pública, la detención hasta el momento del embarco.

La ley, como puede verse deja toda la cuestión en manos del P. E. y aparte de contrariar las garantías básicas más fundamentales, de no distinguir entre extranjeros recién llegados y domiciliados, con arraigo en el país, no comprende todos los casos en que la expulsión es necesaria, ni permite salvar la inacción de la autoridad administrativa. Por último no se trae sanción alguna para los casos de violación del destierro impuesto.

Todos los países del mundo tienen interés en librarse de los indeseables, impidiendo la entrada de los que

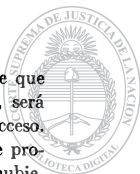


pueden penetrar y expulsando a los que ya han ingresado. En todas partes existen leyes defensivas relacionadas con la inmigración, la entrada de extranjeros, la ciudadanía y la expulsión, de manera que el país que no se preocupa de esa defensa se convierte en el receptáculo de toda clase de sujetos de mal vivir. Y como para nadie puede constituir un programa poblar a base de mendigos, vagos, tratantes de blancas, agitadores, etc., la precisión de una ley que nos equilibre y nos deje por lo menos en las mismas condiciones que se encuentran los demás, es indispensable.

Consideré siempre a la ley de extranjeros como a un estatuto esencial y por eso presenté el proyecto el mismo año en que sometí el de código penal, en la esperanza de que se estudiarían y despacharían juntos. La ley de extranjeros espera todavía sanción del Congreso. El proyecto reproducido por mí todas las veces que he formado parte de la cámara de diputados, se encuentra actualmente a estudio de comisión.

El proyecto de ley de extranjeros se ha insertado en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados varias veces, o sea todas aquellas en que se ha reproducido a causa de la caducidad que se opera cada dos años. Además se ha publicado en 1916, en un folleto titulado: Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria, proyectos a estudio y el año 1922 en el volumen editado por la Cámara con mis proyectos sobre Legislación Penal y Carcelaria.

El proyecto tiene tres capítulos, los que se ocupan de: entrada de extranjeros; empresarios de transportes y capitanes; y disposiciones generales.



En el primer capítulo empieza por establecerse que todo extranjero que quiera entrar a la República, será objeto de un examen para permitir o negar su acceso. Se enumeran después las personas cuya entrada se prohíbe y se autoriza al P. E. para expulsarlas cuando hubiesen ingresado al país, a pesar de estar prohibido su acceso. Esta medida sólo podrá tomarse dentro de los dos años de la entrada.

Los extranjeros que tuviesen más de dos años de residencia sólo podrán ser expulsados por orden de juez. La ley en proyecto se refiere a las causales de expulsión, al procedimiento y a la denuncia.

El estatuto como se vé no sólo tutela las garantías fundamentales, sino que permite salvar por acción judicial las omisiones de la autoridad administrativa.

En el capítulo segundo se responsabiliza a los empresarios de transporte que traigan al país personas alcanzadas por las prohibiciones establecidas y en el tercero se contienen preceptos relativos a la ciudadanía y a su pérdida. Por último se castiga con prisión desde uno hasta tres años al expulsado que penetrase de nuevo al país.

Vagancia y mendicidad. — Cuando presenté a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre vagancia y mendicidad como un anticipo a la legislación completa sobre faltas y contravenciones, no se habían producido una serie de fenómenos sociales que hoy obligan a nuevos criterios de carácter defensivo y resolutorio.



El proyecto en cuestión castigaba al que mendigare teniendo salud y aptitudes para el trabajo, al que lo hiciere simulando enfermedad o deficiencias personales y al que se sirviere de menores para mendigar.

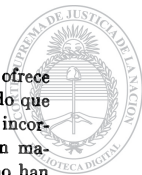
A los inaptos que mendigasen, se les debía recluir en establecimientos apropiados del gobierno o de sociedades particulares subvencionadas.

Se contenían también previsiones especiales para los ebrios y se reprimía al que teniendo condiciones para trabajar se entregase a la vagancia.

La desocupación actual por carencia de trabajo ha producido la quiebra de las leyes sobre vagancia y mendicidad. Estas partían de la base de trabajo ofrecido y de sujetos que se negaban a tomarlo por serles más cómoda la función parasitaria. Pero en estos momentos la oferta de trabajo es inferior a la demanda del mismo y hay miles de personas que no se ocupan porque no tienen materialmente donde hacerlo.

Los proyectos de leyes ordinarias sobre represión de la vagancia y mendicidad no pueden mantenerse, porque alcanzarían a los desocupados y eso no sólo sería atentatorio sino que crearía el nuevo problema de la reclusión y mantenimiento por el Estado de todos los que no tuviesen ocupación y fuesen por tanto alcanzados por los preceptos legales.

Hoy solamente puede legislarse sobre estado peligroso y reprimir la vagancia y la mendicidad que representen un peligro social o sea la vagancia y mendicidad de los profesionales del delito.



Patronato de liberados. — El problema que se ofrece al penado cumplido es a veces pavoroso. Suponiendo que desee volver a la vida social, sus dificultades para incorporarse a la misma y obtener medios de vida son mayores que las que se presentan a los sujetos que no han pasado por los penales. En general las gentes no se resuelven a tomar para su servicio a un ex-condenado. Es necesario entonces procurar que el antiguo penado tenga algún punto de apoyo, un sitio adonde dirigirse, una autoridad que lo ampare y recomiende, alguien que le facilite la regularización de la nueva vida que inicia.

A eso responde en parte la institución del patronato de liberados.

El código penal ha sancionado además el beneficio de la libertad condicional, la que se acuerda a los penados de buena conducta antes de vencido el término de la condena. La libertad condicional equivale a un anticipo y requiere una experiencia desde que si el condenado liberado no responde a la confianza que en él se depositó, debe volver a la cárcel y cumplir íntegramente el tiempo que le correspondió en la sentencia.

El penado liberado condicionalmente debe ser vigilado, es preciso saber si trabaja, si lleva una vida regular, si no se embriaga y si sus costumbres demuestran su corrección, siendo para todo ello indispensable una determinada vigilancia.

El patronato de liberados tiende a llenar esa función social. En la actualidad existen sociedades particulares muy meritorias que luchan con toda clase de dificultades, habiendo tratado con el proyecto correspondiente de que

se transformen en una entidad del Estado con la autoridad y la eficacia necesaria para el cumplimiento de sus finalidades.

* * *

Los proyectos enunciados que en su hora debieron sancionarse junto con el código penal, contienen ideas centrales cuya implantación es hoy tan necesaria como antes. Algunos de ellos debido al tiempo transcurrido deberán experimentar modificaciones para adaptarlos a nuevas circunstancias, las cuales lejos de provocar su abandono imponen su adopción urgente.



LA ESTADISTICA CRIMINAL



Para llegar a conclusiones acertadas acerca de la eficacia o ineficacia de un sistema penal, para conocer el índice de la criminalidad en relación a la población de un país, de una provincia o de una ciudad, para contar en fin con los materiales científicos necesarios a los efectos de legislar con mayor acierto, se requiere tener una estadística llevada en forma.

Esa estadística debe compilar datos proporcionados por la policía, la justicia y los establecimientos carcelarios.

El índice de la criminalidad no lo pueden proporcionar los hechos u omisiones calificados de delito que dan lugar a la instrucción, desde el momento que en muchos de unos y otras recaen resoluciones que declaran, o no constituir delito la imputación, o no corresponder castigo, o no ser el acusado autor de la infracción denunciada.

No se puede considerar como delincuentes sino a las personas que son objeto de una condena impuesta por la autoridad judicial correspondiente.

La estadística debe establecer día por día, sumando los resultados para presentarlos por meses y por años,



cuantos hechos u omisiones calificados de delito se han consumado con la correspondiente clasificación, cuantos autores probables han intervenido, cuantos han sido llevados a la justicia y cuantos no han sido aprehendidos, cuantos han sido condenados y cuantos absueltos. Respecto a los primeros debe establecerse las clases de penas impuestas y los casos de condenación condicional.

Esto en cuanto a los delitos mismos, debiendo las personas de los delincuentes ser objeto de una clasificación especial a los efectos de la reincidencia.

En el proyecto que presenté a la Cámara de Diputados para que se crease el Registro Nacional de reincidencia, coloqué una disposición por la cual se disponía que el Poder Ejecutivo debía organizar como sección de la oficina la estadística penal y carcelaria, debiendo publicarse anualmente los datos referentes a la criminalidad de todo el país. Así mismo se ordenaba levantar un censo carcelario el que serviría de base para la estadística permanente de la criminalidad.

Todo procesado debía ser inscripto en el Registro, tomándose los datos siguientes:

- Nombre y apellido;
- Apodo;
- Edad;
- Nacionalidad;
- Profesión;
- Ficha de las impresiones digitales de ambas manos;
- Filiación; y
- Cualesquiera otro elemento que pueda servir para individualizar al sujeto.



Esta ficha de identificación podía ser cancelada únicamente en los casos de sobreseimiento definitivo y a pedido del acusado.

El registro además debía tener copia de los autos de sobreseimiento, de libertades por falta de mérito y de las sentencias definitivas.

De esta manera, para cada procesado se abre un prontuario que permite en cualquier momento con un índice adecuado conocer su situación.

Se propuso igualmente hacer la organización y las clasificaciones de acuerdo con el sistema dactiloscópico de Vucetich.

El registro debería también obtener el intercambio de fichas con el extranjero y desde luego documentarse en los casos de extradición.

Se pretendía contar no sólo con un organismo defensivo sino con una estadística que permitiera hacer observaciones serias y no aventuradas acerca del problema de la criminalidad.

Actualmente no contamos con una estadística general. La única que se publica es la correspondiente a la Capital Federal y es incompleta, desde que sólo registra los hechos u omisiones calificados de delitos en que interviene la policía.

Con esos datos no se puede obtener el índice de la criminalidad, desde que no consignan quienes son los condenados y los absueltos.

La estadística que publica trimestralmente la policía en forma de un Boletín y a fin de cada año en un Anuario se refiere a los procedimientos policiales. Establecen esos



datos cuantos hechos se cometen y cuantos autores probables de unos y otros existen, además de otra serie de datos interesantes. Pero esa recopilación no determina la suerte de los sujetos sometidos a la justicia, no diciéndonos por tanto, cuantos de entre ellos son delincuentes y cuantos no lo son.

En las provincias no se publican datos estadísticos, recogiendo algunas policías los mismos, pero sólo a los efectos internos de la repartición.

En cuanto a censo carcelario, sólo existe el nacional ordenado en 1929 que contiene los datos referentes a ese año, pero sólo para las cárceles nacionales.

Las afirmaciones por tanto, basadas en datos estadísticos tienen que ser incompletas, pero siempre serán es claro, más fundamentadas que las verificadas por simple impresionismo.

La organización de la estadística criminal urge, para la defensa del país y a los efectos del mejor estudio científico de un problema siempre presente y de actualidad en todo momento.

Debe observarse también que el índice de la criminalidad que la policía de la Capital calcula sobre el número total de delitos que dan lugar a iniciación de proceso, no se puede obtener como lo he dicho sino sobre la cifra de condenados. El que ha sido objeto de un proceso en el cual ha recaído sobreseimiento definitivo o absolución no puede contarse entre los delincuentes. El que sale en libertad por falta de mérito para su detención y aquel que obtiene un sobreseimiento provisional, tampoco

pueden estar comprendidos dentro de la clasificación. De aquí que el índice de la criminalidad contenido en el Boletín y en el Anuario deba ser forzosamente menor que el consignado en esas publicaciones.





MODALIDADES DE LAS REFORMAS. EL EXAMEN DE LAS CAUSAS



Las reformas en nuestra legislación penal han sido casi siempre la consecuencia de hechos determinados unidos a una propaganda pertinaz. De tiempo en tiempo se afirma que los delitos aumentan, que las leyes son insuficientes o ineficaces y que es preciso transformarlas. Ese mismo fenómeno que se nota hoy y que se refleja en los diarios y aun en las conversaciones privadas, se ha producido ya en otras oportunidades. Se asegura para provocar las modificaciones, que los delitos marchan en progresión creciente a causa de la benignidad de la ley o de la falta de previsiones y se reclaman preceptos nuevos con represiones más fuertes y con carácter intimidatorio.

Pero es de notarse que la afirmación ha sido siempre el único argumento, porque los más entusiastas propagandistas no han aportado datos estadísticos ni han comprobado con números la verdad de sus aseveraciones repetidas con la tenacidad de un estribillo.

La reforma de 1903, consistente en un injerto del proyecto Rivarola - Piñero - Matienzo, dentro del código



entonces vigente, se hizo ante el incremento de los crímenes lo que determinaba la necesidad de aumentar las sanciones. Esa reforma elevó considerablemente los castigos para el homicidio y prodigó la pena de muerte, la cual debió haberse aplicado muchas veces si la ley se hubiese cumplido en su letra y en su espíritu.

La ley N°. 4114 se aprobó en general y en particular en un mismo día, el 22 de Noviembre de 1922 en ambas cámaras del Congreso. Su sanción la reclamó el Poder Ejecutivo para tomar las medidas eficaces que reclamaban los sucesos del entonces dominio público.

Los proyectos que se tenían en estudio se dejaron de lado y bajo el apremio de circunstancias especiales se sancionó el articulado que todavía rige.

La ley N°. 7029 o sea la ley social o de seguridad social fué sancionada en dos días por un Congreso impresionado ante el crimen del teatro Colón. La preparación del estado de espíritu que llevó a esa sanción legislativa fué paulatina, sosteniéndose la necesidad de una ley especial y criticándose las represiones vigentes cada vez que un atentado se consumaba. Hechos diversos ocurridos en la vía pública, colocación de bombas en tranvías, tentativa de explosión en la capilla del Carmen y asesinato del Jefe de Policía y su secretario en una calle de la ciudad, fueron acontecimientos que formaron el ambiente. Por eso la explosión de la bomba en el teatro Colón, la que causó víctimas entre personas conocidas en la sociedad, precipitó los acontecimientos.

Los proyectos que no se habían despachado y que los legisladores se despreocupaban de estudiar, fueron así



sancionados de repente sin el examen indispensable en cuestiones de tanta magnitud.

Puede observarse así que el fenómeno análogo se repite periódicamente, pretendiéndose ahora hacer lo mismo que se ha hecho en otras oportunidades, con idéntica falta de resultado y los mismos inconvenientes en la aplicación.

La ley de reformas prodigó la pena de muerte y no obstante haber regido durante veinte años no se aplicó en esa parte, a pesar de haberse ejecutado muchos delitos a los cuales correspondía tal sanción.

La ley de seguridad social extremó aún más la nota, pues llegó hasta castigar con la pena de muerte a las mujeres y a los menores, pero todo eso fué teórico, desde que no se levantó ningún patíbulo a causa de la misma.

Entre tanto, todos los estudiosos desde la cátedra, la prensa y la propaganda convencieron de la necesidad de revisar esos estatutos precipitadamente votados ante la presión de circunstancias especiales.

No se comprende por eso, como contando con esa experiencia haya todavía hombres de gobierno que insistan en el sistema y pretendan que bajo la gravitación de particulares contingencias se dicten leyes fundamentales sin mayor examen y con un apuro injustificable.

Hoy como antes el problema del delito no se resuelve aumentando castigos y amenazando con matar, sino sancionando estatutos orgánicos que defiendan en sus bases a la sociedad siempre jaqueada por el crimen.

El argumento central para la urgencia de las medidas extraordinarias se desprende del aumento de la crimi-



nalidad. Todo el mundo está convencido de que los delitos aumentan y eso se considera como verdad irrefutable. Los datos oficiales no nos dicen eso sin embargo.

La Policía de la Capital publica anualmente un boletín de estadística y en las páginas del mismo se registran los datos referentes a la criminalidad en la ciudad de Buenos Aires. Dichos datos establecen año por año, el número de autores de hechos calificados de delito por cada mil habitantes, habiendo reunido los concernientes a los años posteriores a la vigencia del código penal.

Helos aquí:

Año 1923	6.70
» 1924	7.60
» 1925	8.90
» 1926	8.50
» 1927	6.79
» 1928	7.21
» 1929	6.80
» 1930	7.26
» 1931	7.35
» 1932	Primer Trimestre 1.97

Las cifras anteriores, que son oficiales, como lo he manifestado, no revelan un aumento creciente en la criminalidad. Es cierto que durante el primer año de vigencia del código, el porcentaje fué de 6.70 y que el del año 1931 fué de 7.35, pero es exacto también que se ha oscilado encontrándose el máximo en 1925 en que se llegó a 8.90, descendiendo en 1926 a 8.50 y en 1927 a 6.79 para seguirse con pocas variaciones.



Esos números que son expresión de verdad, chocan sin duda con el concepto público y con la propaganda que difunden tanto periodistas como pretendidos técnicos y que han contribuido a formar la opinión corriente.

El Poder Ejecutivo mismo no ha podido sustraerse a la presión de la diaria afirmación y en el Mensaje de 6 de Diciembre de 1932 enviado a la Cámara de Senadores, dice que el deber de proveer a la defensa social, exige hoy mayor atención ante el incremento de la delincuencia.

Si se tiene en cuenta el número de delitos cometidos en la ciudad de Buenos Aires en relación a la población, se observa que el crecimiento de aquellos no es anormal.

La estadística de la Policía proporciona los siguientes datos oficiales:

Año 1904	7.287	delitos
» 1905	7.336	»
» 1906	7.585	»
» 1907	8.532	»
» 1908	8.735	»
» 1909	9.273	»
» 1910	11.136	»
» 1911	11.996	»
» 1912	13.312	»
» 1913	14.894	»
» 1914	11.842	»
» 1915	10.156	»
» 1917	12.553	»
» 1920	10.802	»



Año 1921	9.040 delitos	
» 1923	12.029	»
» 1924	13.795	»
» 1925	16.754	»
» 1926	16.684	»
» 1927	13.754	»
» 1928	15.078	»
» 1929	14.405	»
» 1930	15.732	»
» 1931	16.141	»

En el primer trimestre del año 1932 se han cometido 4.310 delitos, según la policía y dentro de la Capital Federal.

En 1904 cuando el número de delitos alcanzó a 7.287 la población de la Capital era de 979.285 habitantes, o sea menos de la mitad de lo que hoy tiene. En 1910 el número de delitos se elevó a 11.136 pero la población había crecido hasta 1.314.163 habitantes y en 1915 los delitos alcanzaron a 10.156 con una población de 1.598.000 personas.

Actualmente los datos oficiales atribuyen a la Capital 2.185.369 habitantes.

La progresión creciente no es tampoco constante desde que a 13.795 delitos cometidos en 1924, siguen 16.754 en 1925 y 16.684 en 1926 que son los años más cargados, para bajar el siguiente año 1927 a 13.754. Desde este último vuelve a subirse, pero nunca para superar a los años 1925 y 1926.



Los datos que me proporciona la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que comprenden todos los hechos delictuosos cometidos en ese Estado, año por año, son coincidentes con los de la Capital Federal y permiten hacer idénticas deducciones.

Las cifras, año por año desde 1920, son las que se consignan a continuación:

	Número de delitos	Autores probables
1920	17.420	20.545
1921	15.869	18.761
1922	14.605	17.518
1923	13.928	16.648
1924	14.422	17.013
1925	14.833	17.127
1926	15.085	17.653
1927	16.081	18.415
1928	17.387	19.711
1929	17.737	20.048
1930	16.996	19.283
1931	14.912	16.969
1932 (únicamente los meses de Enero a Noviembre inclusive	16.114	18.819

El Código Penal como se sabe empezó a regir en 1922, de manera que si se tomaran los números antes transcritos como expresión absoluta, habría que convenir en que su vigencia lejos de aumentar los delitos los dismi-



hubo, desde que en 1920 se registraron 17.420 infracciones y en 1921, 15.869 para disminuir en 1922 a 14.605 y en 1923 a 13.928. La cifra del 1920 sólo ha sido superada en 1929 para bajar en los años sucesivos. Todo esto sin tenerse en cuenta que la población ha crecido en la Provincia de Buenos Aires, lo mismo que en la Capital Federal.

No se puede entonces afirmar, de acuerdo con los informes oficiales, que la delincuencia haya crecido de una manera alarmante y como para justificar medidas de carácter extraordinario.

Nos encontramos sin embargo en presencia de un hecho o sea la convicción general del aumento de la criminalidad, lo que ha creado un ambiente de inquietud capaz de aparejar deplorables consecuencias sociales.

Esta atmósfera particular obedece sin duda a causas que una observación detenida nos permite apreciar.

VII

LAS NUEVAS FORMAS DEL DELITO. SUS CAUSAS



Los publicistas de hace veinte años coincidían en afirmar que el delito se había transformado en sus formas, evolucionando de la violencia al fraude. El homicidio como medio para atentar contra la propiedad disminuía, pero en cambio la defraudación en sus variadas formas, se presentaba en aumento.

Nicéforo sostenía que el hombre había creado dos grandes formas de civilización: la violenta y la fraudulenta. En la primera la lucha por la vida se desenvuelve principalmente mediante la fuerza, conquistándose el poder político y la riqueza por medio de las armas. En la segunda la lucha es de astucias y engaños, adquiriéndose el poder y la riqueza por el oro y no por el hierro.

A esas distintas modalidades de civilización corresponden formas diversas de criminalidad, siendo correlativas las unas de las otras.

La evolución anotada por los criminalistas no ha persistido desde que es notoria ahora la repetición de atentados violentos contra la propiedad.



Hoy en todos los países del mundo el robo se consuma frecuentemente en forma violenta y espectacular. Los bancos, las casas de comercio, los pagadores, los establecimientos y las personas que tienen dinero o que lo transportan, son frecuentemente asaltadas por criminales que usan de sus armas y se apoderan de la propiedad ajena prodigando la violencia. Emplean para eso los elementos ofensivos más poderosos, intimidan y actúan procediendo con rapidez y resolución. La vida del propietario o guardador les es perfectamente indiferente ante el éxito de la finalidad perseguida.

Los delincuentes de las nuevas formas emplean las armas de precisión más eficaces, usan el automóvil y se presentan organizados no sólo para el éxito del atentado, sino a los efectos de asegurar la impunidad.

Las autoridades se encuentran frente a bandas de delincuentes audaces que reúnen en un lugar y momento dados, una fuerza mayor que la policial ordinaria o la de custodia del objeto del ataque, consumando el atentado generalmente sin mayor dificultad y sin correr peligro.

Esas formas de delincuencia son espectaculares, producen considerable alarma, se difunden profusamente y crean la intranquilidad.

Una cantidad de sucesos policiales, aun los más graves, no tienen la repercusión que presenta uno solo de esos atentados.

El ataque al Banco de San Martín, el asalto al pagador de las Obras Sanitarias, el tiroteo frente a la Aduana en persecución de un empleado que lleva el dinero,



el robo a mano armada en la sucursal del Banco de Londres, son hechos que absorben la atención pública durante muchos días y ocupan el comentario general.

Las gentes en presencia de esos sucesos entienden que la criminalidad aumenta, cuando lo que ocurre en realidad es que se transforma ofreciendo características más intimidatorias.

La morbosa publicidad moderna tiene parte considerable en la obra. Se produce uno de esos asaltos que crean un estado de intranquilidad y los diarios se esmeran en describirlo con todos sus detalles. La vida de las víctimas es exhibida, se publican retratos, se exponen los antecedentes personales, se habla hasta de las intimidades y se crean efímeras personalidades populares. Se agotan las investigaciones periodísticas para descubrir algún carácter nuevo en los muertos o en los sobrevivientes y en todo eso se complican jueces, fiscales, secretarios en un verdadero delirio de ostentación.

Hace poco tiempo con motivo de un homicidio vulgar, algunos diarios publicaban grandes fotografías de la persona acusada ante el juez y otros funcionarios en cuidadosa pose, obtenida al firmarse la declaración indagatoria. Lo que no consigue una persona honesta, lo que no logra a veces un meritorio autor, lo alcanza quien consuma un delito.

La publicidad alrededor de un crimen no termina, sino cuando otro suceso análogo, presenta nuevo material. Mientras no se cuenta con elemento para las crónicas truculentas, el hecho producido se estira, procurándose servir cada día un nuevo plato recibido con fruicción por la voracidad de nuestro especialísimo público,



Cuando el nuevo hecho tiene lugar, el anterior se abandona y los personajes de un momento vuelven a la sombra, después de una brillazón fugaz.

Los efectos del suceso, abultados y esparcidos persisten y contribuyen a mantener un estado de inquietud, unido a la persuasión de encontrarse mal defendido el organismo social. Y como casi nadie confiesa ni quiere confesar sus errores ni sus deficiencias, los inconvenientes se señalan en la ley y se aboga por lo más simple y llamativo, el aumento de las penas como un freno para el incremento de la violencia.

La modificación de las formas en la delincuencia requiere la atención de los sociólogos y los legisladores. Los primeros deberán estudiar causas y aconsejar remedios, mientras que los segundos deben afrontar el problema del momento y proveer por lo menos a que disminuya la inseguridad.

En mi concepto la violencia creciente en la criminalidad del momento se debe a motivos de índole diferente, que se han ido formando poco a poco y que constituyen el efecto de múltiples factores sociales.

Los delitos y los delincuentes son muy diversos y han sido objeto de clasificaciones doctrinarias y legales. Los códigos al contener títulos diferentes, para las distintas clases de infracciones, clasifican los delitos y al consignar sanciones diversas para los mismos atentados, teniendo en cuenta las particularidades del hecho o las del sujeto, clasifican a los delincuentes.

En medio de todas esas características la antigua división entre ocasionales y habituales se mantiene, preo-



cupándose los legisladores de los segundos más que de los primeros porque aquellos llegan a formar una categoría especial de personas que están siempre en acecho planeando infracciones o ejecutándolas. La lucha actual se dirige especialmente contra los delinquentes habituales, marcándose diferencias en la ley y en los hechos entre unos y otros.

Cuando las leyes sancionan la condena condicional para quienes delinquen por primera vez, cuando la doctrina propicia y las leyes aceptan la ampliación de las excarcelaciones y la limitación de la prisión preventiva para los que carecen de antecedentes, no proceden por un sentimentalismo morboso, sino para defender mejor a la sociedad contra los ataques de la delincuencia.

Si el enemigo más serio de la sociedad moderna es el reincidente, lo que debe tratarse es evitar que la repetición del crimen se produzca y para ello el tratamiento de los novicios debe ser muy diferente al de los otros.

La prisión preventiva a la que tiene horror el hombre honesto no impresiona al profesional, para quien es algo así como un accidente del trabajo, a veces remunerativo porque le permite extender sus actividades, hacerse de relaciones y llevar a su causa nuevos prosélitos.

A la sociedad le conviene entonces separar al que no tiene antecedentes, darle un tratamiento especial, liberarlo, si es posible tomando garantías morales y precauciones materiales, pero no dejarlo entregado a la influencia de los compañeros de cárcel. El hombre encerrado con criminales no sólo tiende a pervertirse, sino que encuentra



a la terminación de la prisión preventiva, cerradas las puertas para las actividades honestas. Muchas, pero muchas veces una prisión preventiva larga, hace de un infractor ocasional, un delincuente peligroso, el que inicia las nuevas y perniciosas actividades después de la absolución o del cumplimiento de una condena reducida.

El sentimentalismo liberal y enfermizo que se achaca por los espíritus fuertes a los sostenedores del código penal, no existe nada más que en el cerebro de ciertos observadores superficiales que no distinguen matices y que ante los hechos sostienen la represión uniforme y violenta sin tener en cuenta, ni antecedentes, ni consecuencias.

El delincuente habitual vive del delito, constituyendo él mismo su profesión y su medio de subsistencia. Ese tipo de sujeto debe, por tanto, buscar en cada operación el éxito, el cual consiste en el apoderamiento de los objetos ajenos seguido de la impunidad.

El medio es una cuestión secundaria ante los objetivos fundamentales que son como lo comprueba la experiencia, y lo repito; el apoderamiento del objeto y la impunidad.

Para llegar se buscan las formas que aseguren el éxito y aquéllas varían conforme a las circunstancias. La antigua violencia era perfectamente lógica y la imponían las características sociales. La riqueza mobiliaria se reducía a objetos y dinero, debiendo el delincuente buscar su apoderamiento con las formas requeridas por el estado de cultura general. Pero las diferentes características económicas, la creación de papel moneda, de títulos, de instrumentos de crédito, las variadísimas for-



mas de los valores, permitieron llegar al éxito por medio del ardid y de aquí la comprobación de una evolución en la delincuencia de las formas violentas a las fraudulentas.

A esto se agregaba un factor que no he visto señalado, pero que se relaciona directamente con mi observación relativa al éxito perseguido como elemento primordial y es el de la inseguridad del medio violento para afianzar la finalidad.

Los policías en efecto, se encontraban en condiciones superiores al criminal, el que debía para realizar sus actos de violencia, esconderse y tratar de hallar a su víctima sola y en condiciones de inseguridad. La policía armada convenientemente y los particulares, defendidos por lo menos en forma análoga a la de los atacantes, habían creado para los asaltantes condiciones que no eran propicias.

En los últimos años las condiciones han variado. Ha influído desde luego un factor psicológico de importancia trascendental y ha sido la gran guerra seguida de conflictos armados en diferentes países que no han terminado aún. El desprecio por la vida humana se ha acentuado, la influencia de los principios jurídicos ha disminuido, el imperio de la fuerza se difunde y hasta en las organizaciones internas de los pueblos se distingue entre vencedores y vencidos sosteniéndose que la democracia y sus formas han hecho crisis.

En un ambiente de violencia como el que se ha creado y se mantiene no se puede esperar, como resultado, otra cosa que la violencia. Es la lógica cosecha que se recoge como consecuencia de la siembra.



Hoy en el orden internacional, la diplomacia es un auxiliar de la fuerza. Los representantes que los países acreditan como embajadores o ministros son agentes comerciales que se preocupan de conseguir o imponer, según los estados en que actúan, determinadas normas para las relaciones mercantiles.

En todas partes se acentúan los hechos proteccionistas y se levantan barreras aduaneras, a veces infranqueables, que constituyen también manifestaciones de fuerza. Hay países cuyos habitantes carecen de los alimentos necesarios y existen otros que no pueden colocar los que tienen en exceso, debido a las aduanas respaldadas por los cañones y los fusiles del que crea esos obstáculos tan fuertes en sus efectos como lo eran en tiempos pasados las murallas chinas, que aislaron al celeste imperio del resto del mundo.

En el orden interno de los países surgen en todas partes los partidarios de la imposición y del absolutismo; las revoluciones que son también manifestaciones de violencia se propagan y en muchas partes, ya ni se recurre a los fraudes electorales porque se emplea desembozadamente la fuerza por quien la tiene para custodiar derechos y no para desconocerlos.

El criminal de las nuevas formas es así un exponente del ambiente colectivo, que se adapta a las modalidades dominantes.

Todos esos factores contribuyen a formar una nueva moral, nos acostumbran a considerar que todo se resuelve por medio de la fuerza y a entender que las vidas, perdidas a montones en los campos de batalla, carecen de importancia.



Aparte de la situación de espíritu que debe crear ese crimen colectivo llamado guerra, se encuentra para el delincuente, el otro factor, el material, el relativo al éxito de su trabajo individual y antijurídico.

El fraude como actividad para lograr el apoderamiento de bienes ajenos ha extremado los ardides y esto ha obligado a precauciones mayores por parte de particulares e instituciones.

La falsificación de moneda se ha hecho más difícil por los materiales especiales que emplean los gobiernos, la adulteración de cheques se ha hecho imposible con la impresión de las cifras perforando el papel, la fiscalización y las precauciones en general, han quitado a los profesionales del delito las facilidades anteriores.

En cambio en el terreno de la violencia la acción ha sido facilitada porque se han inventado armas que permiten a un solo individuo combatir contra muchos, inutilizando con gran rapidez a los tenedores o guardadores de los objetos cuyo apoderamiento se persigue. Un asaltante con pistolas automáticas o con un fusil ametralladora puede derrotar a muchos hombres armados, a los cuales les impide el uso de sus elementos de defensa.

La delincuencia así, buscando la consecución de sus planes se ha adaptado a la vida moderna, usa los elementos de destrucción que se han creado para la guerra y organiza pequeñas batallas en las cuales los atacantes no suelen experimentar quebrantos.

Los atentados actuales se caracterizan por el uso rápido de los medios más eficaces de ataque sin reparar



en las consecuencias, en la preparación de la retirada y en el aseguramiento de la impunidad.

Los hechos ocurridos aquí han demostrado que los autores de los asaltos más espectaculares han previsto el suceso y han asegurado su éxito, consumándolo sin peligro y sin castigo ulterior.

Los particulares no llevan consigo ni armas eficaces ni defensas, ni protección, la policía misma ha tenido medios incompletos y no ha podido preocuparse de una instrucción especial, mientras que los delincuentes cuando planean un asalto se presentan en condiciones de perfecta eficiencia.

La lucha es tan desigual como la que se produce a cada momento en los pueblos más atrasados, adonde los países más fuertes penetran con expediciones de expansión que se traducen en masacres de aborígenes o naturales, primitivamente armados por tropas que se dicen civilizadas, pertrechadas en la forma más completa.

¿El aumento de las penas es el remedio para estas formas nuevas de ataque antisocial?

Mi opinión continúa siendo negativa, no obstante que a primera vista la solución propuesta parece la más simple y eficaz

VIII

LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS



Las penas grandes o chicas deben aplicarse a los que consuman infracciones. Lo primero que se requiere por tanto para que un sistema penal no fracase es que los autores de los atentados se individualicen y sean habidos, se juzguen y se condenen.

De lo contrario la defensa social desaparece y el hecho de la impunidad suscita una justificada alarma.

Los sucesos más impresionantes de los últimos tiempos se encuentran envueltos en el misterio y los esfuerzos de la autoridad para señalar y detener a los culpables han sido de todo punto vanos.

Los tres secuestros violentos recaídos en personas de posición que fueron objeto del comentario apasionado de las gentes, han presentado un saldo desconsolador. En el primero y en el tercero apareció la víctima pero no los victimarios, y en el segundo ni el uno, ni los otros. En los tres casos se exigía dinero y en todos el público se interesó vivamente, reclamándose por la generalidad sanciones más severas para esa clase de delitos. En el



afán de pedir represiones se ha afirmado que la pena máxima del código penal es la de cuatro años para los secuestradores, refiriéndose al artículo 142 colocado en el título de los delitos contra la libertad, pero olvidando que si se consuma el hecho para sacar rescate, la represión alcanza a diez años, según lo establece el artículo 170 incluido en el capítulo sobre extorsión.

Pero en los hechos, cualesquiera pena es inútil cuando no se encuentra a quien aplicarla y en el caso de los secuestros, la previsión legal severa o débil ha sido ineficaz, desde que los autores no han sido descubiertos.

En los atentados más visibles realizados con violencia contra la propiedad, los autores han resultado ignorados y la ley no ha tenido sobre quien aplicarse.

Quiere decir así que hay un deber imperioso relativo a la seguridad pública que es necesario llenar con preferencia a toda reforma de carácter legislativo.

Los informes oficiales proporcionados por la policía de la Capital demuestran donde se encuentra el centro del problema.

En el año 1923 sobre 4064 autores probables de delitos contra las personas, se capturaron 3139 y se fugaron 885. En el mismo periodo de tiempo sobre 5173 autores probables de delitos contra la propiedad se aprehendieron 984 y se fugaron 4199. En los delitos contra las personas, sobre cada 100 autores se aprehendieron 78.22 y desaparecieron 21.78 y en los delitos contra la propiedad fué tomado el 19.34 % y se fugó el 80.66.

En 1924 los datos oficiales dicen:



Delitos contra las personas

Autores probables 5112, Aprehendidos 4088, Fugados 1024.

Delitos contra la propiedad

Autores probables 6482, Aprehendidos 1555, Fugados 4927.

Porcentajes en los delitos contra las personas:

Aprehendidos 79.50 %, Fugados 20.04 %.

En los delitos contra la propiedad:

Aprehendidos 23.98 %, Fugados 76.02 %.

En 1926 sobre 6328 autores probables de delitos contra las personas, fueron tomados 5112 y se fugaron 1216, lo que representa un 83.09 % de aprehendidos sobre 16.91 de no habidos.

En ese mismo año sobre 7810 autores probables de delitos contra la propiedad, se tomaron 1816 y se fugaron 5994, lo que representa el 23.25 % de aprehendidos y el 76.75 de evadidos.

Los resultados en los años siguientes son análogos, como puede comprobarse en el cuadro que se inserta a continuación:



	1927	1928	1929	1930	1931
Autores probables en delitos contra las personas	6.438	1.383	1.077	1.253	1.392
Aprehendidos	5.278	3.323	3.059	3.135	3.443
Fugados	1.160	1.060	1.018	1.118	949
Porcentaje de aprehendidos	82	76	75	76	78
Porcentaje de fugados ...	18	24	25	24	22
Autores probables en delitos contra la propiedad	7.614	7.527	6.434	7.117	7.378
Aprehendidos	1.592	1.802	1.508	1.644	1.735
Fugados	6.022	5.725	4.926	5.473	5.643
Porcentaje de aprehendidos	21	24	23	24.50	24
Porcentaje de fugados ...	79	76	77	75.50	76

Los informes antes transcritos comprueban que existe en general un elevado porcentaje de autores probables de delitos que quedan cubiertos por la impunidad. Ese porcentaje ha oscilado en los delitos contra las personas desde el 18 % hasta el 25 en los últimos cinco años y en los atentados contra la propiedad desde el 75.50 % hasta el 79.

En los delitos contra la propiedad, que es donde se encuentran los profesionales de la delincuencia, más de



las tres cuartas partes de los atentados que se cometen quedan impunes en la ciudad de Buenos Aires. Esto sin contar los detenidos que son absueltos por falta de pruebas y aquellos a quienes las causas se les prescriben. Prácticamente así los delitos contra la propiedad son reprimidos en una mínima parte y cuentan, puede afirmarse con la probable falta de represión.

El problema que plantean las propias cifras oficiales es pavoroso y demuestra una vez más que el centro del mal no se encuentra en el código y que es algo más esencial lo que está conmoviendo en sus cimientos a la sociedad argentina.

Los datos que he obtenido en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, demuestran también que el número de personas no aprehendidas es enorme con relación al de delitos cometidos.

Tomando los delitos en conjunto, los números nos dicen lo que expresa la planilla transcrita a continuación:



	Aprehendidos	No aprehendidos
Año 1920	9.756	10.789
» 1921	9.394	9.367
» 1922	9.253	8.265
» 1923	9.083	7.565
» 1924	8.889	8.124
» 1925	8.650	8.477
» 1926	9.410	8.243
» 1927	9.447	8.968
» 1928	9.775	9.936
» 1929	10.358	9.690
» 1930	9.889	9.394
» 1931	8.831	8.138
» 1932 (meses de Enero a Noviembre inclusive	8.985	9.834

Como puede verse tomando un año con otro, alrededor del cincuenta por ciento de los autores probables de delitos en general, no son aprehendidos por las autoridades administrativas en la provincia de Buenos Aires.

Si se tienen en cuenta los delitos contra las personas y los atentados contra la propiedad, se observa que el índice de no aprehendidos es mucho mayor en los últimos que respecto a los primeros, ocurriendo en la provincia el mismo fenómeno que anotamos ya en la Capital Federal.

Las planillas de datos que me proporciona la policía de la Provincia de Buenos Aires, confeccionadas a mi pedido, consignan las siguientes informaciones:



DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

	Delitos	Autores probables	Aprehen- didos	No apre- hendidos
Año 1920	5.347	6.630	5.237	1.393
» 1921	5.151	6.249	4.883	1.366
» 1922	5.417	6.553	5.197	1.356
» 1923	5.514	6.806	5.465	1.341
» 1924	5.726	6.976	5.540	1.436
» 1925	5.901	7.096	5.527	1.569
» 1926	6.367	7.630	5.982	1.648
» 1927	6.987	8.277	6.435	1.842
» 1928	7.467	8.765	6.720	2.045
» 1929	8.108	9.377	7.154	2.223
» 1930	7.436	8.679	6.679	2.000
» 1931	6.210	7.189	5.748	1.441
» 1932	6.284	7.476	5.777	1.699

Año de 1932, solamente los meses de Enero a Noviembre.



DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

	Delitos	Autores probables	Aprehen- didos	No apre- hendidos
Año 1920	10.990	12.067	3.029	9.038
» 1921	9.536	10.464	2.727	7.737
» 1922	8.101	8.962	2.407	6.555
» 1923	7.245	7.958	2.097	5.861
» 1924	7.637	8.367	2.048	6.319
» 1925	8.062	8.860	2.224	6.636
» 1926	7.580	8.319	2.031	6.288
» 1927	7.987	8.707	2.006	6.701
» 1928	8.860	9.665	2.257	7.408
» 1929	8.366	9.163	2.224	6.939
» 1930	8.390	9.186	2.204	6.982
» 1931	7.599	8.486	2.103	6.383
» 1932	8.798	10.004	2.385	7.619

El año 1932 solamente los meses de Enero a Noviembre.

Obsérvese además que la impunidad por falta de aprehensión aumenta el índice estadístico de la criminalidad. El sujeto que comete un atentado y no es habido se encuentra en condiciones de repetir su hazaña y mientras la autoridad cataloga, dos, tres o más hechos con otros tantos autores probables, en realidad puede haber solo uno que reincide impunemente.

Lo que urge, por consiguiente, es que los delincuentes sean aprehendidos combatiéndose con eficacia el profesionalismo ilícito en pleno florecimiento.



La falta de una estadística completa de la criminalidad no permite conocer una faz muy interesante de la represión consistente en las cifras de autores presuntos aprehendidos que no son condenados por la justicia a la cual los somete la autoridad policial.

Capturado un presunto autor de delito puede ocurrir: 1°. que sea puesto en libertad por falta de mérito; 2°. que sea objeto de un auto de prisión y excarcelado; 3°. que obtenga un sobreseimiento provisional; 4°. que sea sobreseido definitivamente; 5°. que sea absuelto; y 6°. que sea condenado.

De diversas maneras y por diferentes motivos puede así obtener la libertad un autor presunto de delito aprehendido por la policía, lo que remarco especialmente porque es preciso tener en cuenta que el total de autores presuntos detenidos no puede considerarse como un total de delincuentes, desde que sólo se deben catalogar como tales a los que son objeto de condenación.

El número de presuntos autores detenidos que obtienen ante la justicia la libertad definitiva o provisoria no lo conocemos, porque los datos respectivos no se registran en ninguna oficina y eso no nos permite afirmar pudiendo sólo conjeturarse.

Hay un gran número de personas sometidas a la justicia que son sobreseidas o absueltas y hay otras que libertadas provisionalmente se evaden y cuando la autoridad los reclama de nuevo han desaparecido.

Por último, entre los detenidos y condenados o procesados hay quienes eluden la pena o el proceso, evadiéndose de los establecimientos carcelarios.



Quiere decir así que al enorme porcentaje de autores presuntos que no se detienen hay que añadir el de detenidos que se absuelven, se libertan o se evaden a los efectos de tener el índice real de la represión. Como esos datos no se recogen no pueden darse, pero si el término medio de no aprehendidos es en la Capital Federal de 20 % para los delitos contra las personas y 78 % para los delitos contra la propiedad, puede asegurarse que en la represión de los primeros un número considerable eluden la acción social y en la de los segundos la casi totalidad.

En los ataques a la propiedad la impunidad de los autores es la regla, siendo la condena una verdadera excepción.

El censo de las cárceles nacionales es también revelador al respecto.

El 31 de Diciembre de 1929 a las 12 de la noche, las 12 cárceles de la Nación tenían encerrados a 2.861 personas, según el censo practicado bajo la dirección del Dr. Juan J. O'Connor, Inspector Nacional de Justicia y publicado oficialmente.

El cuadro de la población carcelaria se descompone en la siguiente forma:

CARCELES



Cárcel de Encausados	602
Penitenciaría Nacional	663
Asilo Corr. de Mujeres	52
Cárcel de Tierra del Fuego	468
» del Chaco	263
» de Formosa	118
» » Misiones	76
» » La Pampa	181
» » Neuquén	66
» » Río Negro	224
» » Chubut	96
» » Santa Cruz	52

2.861

Si tomamos de ese cuadro las cifras correspondientes a las cárceles de la Capital Federal para coordinarlas con las de la Policía de la misma, notamos los resultados que indico a continuación:

Cárcel de Encausados	602
Penitenciaría Nacional	663
Asilo Corr. de Mujeres	52

Total 1.317

Quiere decir así que la Capital Federal en la cual se sindicán por año alrededor de 16.000 autores presuntos



de delitos, no tiene reclusos más que 1317 personas. Si se considera que los alojados en Ushuaia pertenecen a la Capital, aunque se sabe que eso no ocurre con todos y agregamos a esos 317 los 468 del presidio de Tierra del Fuego, la suma nos da 1785 condenados y encausados.

Es exacto que en el Departamento de Policía, en las comisarías, en el Palacio de Justicia y en los hospitales hay encausados, lo que aumentaría los números del censo, pero si se reduce éste a los condenados que corresponden a la Capital Federal, los números nos dicen:

Penitenciaria Nacional	663
Asilo Correccional de Mujeres	52
Cárcel de Tierra del Fuego	468
<hr/>	
Total	1.183

Quiere decir que la Capital sólo tiene 1.183 condenados, frente a los 16.000 autores probables de delitos que se cometen por año. Y esa cifra de 1.183 es todavía grande, pues en la cárcel de mujeres hay procesadas que deben excluirse y en la de Ushuaia existen penados de jurisdicciones ajenas a las de la Capital Federal.

Los números nos muestran una vez más la impunidad existente o sea el verdadero mal que aflige en este momento a la sociedad argentina, inerte y sin defensa frente al problema del crimen.

El censo carcelario levantado bajo la dirección del Doctor O'Connor que contiene diferentes e interesantes clasificaciones fija también los números de penados con relación a cada delito cometido.



Los condenados por delitos contra las personas, correspondientes a la Capital Federal suman 637, distribuidos así:

Penitenciaría Nacional	317
Asilo Correccional de Mujeres	25
Cárcel de Tierra del Fuego	295

Los condenados por delitos contra la propiedad ascienden a 357 divididos en la siguiente forma:

Penitenciaría Nacional	218
Asilo Correccional de Mujeres	19
Cárcel de Tierra del Fuego	120

Estas cifras comparadas con el número de delitos que se consuman son asombrosas y comprueban una vez más el mal del momento que se puede sintetizar afirmando la presencia de una verdadera crisis de represión.



LA CUESTION DE LA PENA DE MUERTE

Cada vez que se consuma un crimen brutal o tiene lugar un asalto audaz, el estribillo se repite atribuyéndose a la supresión de la pena de muerte la causa del hecho. La pena capital, intimidada, se dice, es la única que detiene la mano de los malhechores, de manera que su eliminación desata el delito en sus aspectos más feroces.

La afirmación difundida con persistencia por órganos prestigiosos de la opinión pública penetra en los espíritus y forma un ambiente que no coincide ni con la verdad científica, ni con los antecedentes nacionales.

La ciencia demuestra que la pena capital es intimidatoria para quienes no cometen actos capaces de imponerla, pero que no tiene semejantes efectos para los individuos susceptibles de consumir crímenes. La pena de muerte atemoriza a las gentes honestas, pero no sujeta la garra de los profesionales de la delincuencia, los cuales no tienen en consideración el castigo desde que piensan siempre en eludirlo.

El funcionamiento frecuente del patíbulo en diferentes estados no consigue ni suprimir, ni disminuir la criminalidad, siendo la pena capital un resabio de ven-





ganza con el cual se satisface a muchas gentes honestas, sin contribuir a la solución de un problema que es esa realidad insoluble.

Los elementos de juicio acerca de este asunto los he desahucado en otra oportunidad y sería inútil repetirlos, de manera que aquí sólo voy a ocuparme de la campaña del momento y de algunos aspectos de la cuestión, propios de nuestra sociedad y nuevos en nuestro ambiente.

Cuando se sancionó el código penal, una de las pocas voces que se levantó para llamar la atención acerca de la reforma y apoyarla entusiastamente en los puntos que fueron después más discutidos, fué la de Don Leopoldo Lugones, quien en un comunicado publicado en el diario "La Nación" en Octubre de 1921 y titulado un fasto, decía: "la sanción del nuevo código penal es un acontecimiento tan importante para nuestra vida pública, como la de los derechos y garantías de la Constitución a cuya virtud somos ante el mundo un país civilizado. Baste recordar que ese instrumento jurídico ha abolido la pena de muerte y derogado las infames leyes llamadas de residencia y defensa social, además de adoptar todo cuanto en la materia comporta un adelanto probado de carácter humanitario y científico. Así quedamos libres de la mancha que nos infligía una penalidad atroz, cuyo desborde había llegado hasta la persecución de las ideas. Es esa a no dudarlo una de las obras que comprometen la gratitud de la República".

La opinión fué sin embargo paulatina y sistemáticamente trabajada, para convencerla de que la supresión



de la pena de muerte era la causa principal del recrudecimiento del crimen. Una ley benigna, como se decía, impregnada de malsano sentimentalismo no defendía eficazmente a la sociedad conmovida por los ataques de los delincuentes.

No se tenían en cuenta para esa crítica constante y disolvente los antecedentes proporcionados por nuestra legislación represiva y el sentimiento público tantas veces exteriorizado cuando de la pena de muerte se trataba.

Antes de la reforma hecha en el año 1903 la pena de muerte se autorizaba para ciertos homicidios, pero se fijaban en la ley las siguientes restricciones:

- A) No podía imponerse cuando sólo hubiese prueba de presunciones por más vehementes que fueran;
- B) No se podía hacer efectiva sobre las mujeres, ni sobre menores de edad, ni sobre los mayores de 70 años;
- C) No procedía cuando existía alguna circunstancia atenuante;
- D) No podía aplicarse después de haber transcurrido dos años a contarse de la fecha del crimen; y
- E) No se autorizaba tampoco cuando había corrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción del delito.

Además en los códigos de procedimientos se exigía la unanimidad de opiniones en el tribunal de última instancia.



Todas esas limitaciones habían dado lugar a que la pena de muerte fuese un enunciado teórico de la ley y no una realidad.

La ley de reformas N°. 4189 autorizó la aplicación de la pena de muerte en más casos que el código y la sancionó también sin tener en cuenta la concurrencia de atenuantes, pero en la práctica los efectos fueron los mismos de antes desde que, ni en la Nación, ni en las provincias, ni en los territorios, la pena capital se aplicó.

Todos esos elementos se olvidaban por los censores del código, los cuales consideraban necesario levantar el patíbulo en nuestro país.

La gloria argentina no parecía completa. Teniendo Inglaterra la horca, Francia la guillotina y Estados Unidos la silla eléctrica, nuestra República debía consagrar algún invento en la materia para estar a tono con la civilización.

En este estado de opiniones exteriorizadas, que habían penetrado sin duda en las clases que se dicen más elevadas, sobrevino la revolución del 6 de Setiembre, de la cual surgió un gobierno provisional.

Los hombres que llegaron al mismo tenían el deber primordial de guardar el orden y evitar los excesos que generalmente se producen después de los grandes sacudimientos políticos. Procedieron teniendo en cuenta la necesidad elemental de conservación, pero se encontraron seguramente influidos por la propaganda anterior, según la cual las instituciones consagradas por el Código Penal y su sistema represivo no eran eficaces para luchar contra la delincuencia.



Se tomaron para salvar lo que se presumía un error, una serie de medidas de emergencia que modificaron para ciertos casos la ley penal de fondo, los prodecimientos y las jurisdicciones.

La primera medida fué tomada el mismo día 6 de Setiembre de 1930 y se publicó con el título de Bando N°. 1, estableciéndose en dos artículos, lo siguiente:

1°. — Todo individuo que sea sorprendido in fraganti delito contra la seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y seguridad pública, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso.

2°. — Las fuerzas que tengan a su cargo el cumplimiento de este bando, sólo podrán hacerlo efectivo bajo la orden y responsabilidad de un oficial del Ejército de mar y tierra de la Nación. Los suboficiales que sorprendan a cualquier individuo en las condiciones antedichas, deberán detenerlo y someterlo de inmediato a la disposición del primer oficial a su alcance para su ejecución.

Pocos días después, se dictó el Bando N°. 2, en el cual por primera vez se habló de la ley marcial o sea del sometimiento a proceso de civiles por determinados delitos, a los tribunales militares los que deben aplicar las leyes y los procedimientos correspondientes a esa jurisdicción.

Ese bando tenía también por objeto mantener la seguridad pública y decía así:

En vista de las perturbaciones producidas a la tranquilidad pública por civiles armados, y siendo indispensable asegurar el orden y dar las garantías a la vida y a la propiedad, se hace saber que toda persona que se en-



cuentre haciendo ostentación de armas en la vía pública, desde las 18 horas del día 9 de Septiembre en adelante, será sometida al rigor de la ley marcial.

El Bando N°. 3 sobre recuperación de armas de propiedad de la Nación, dictado también con un propósito de defensa ante las circunstancias anormales por las cuales pasaba el país, contenía los dos siguientes artículos:

1°. — Habiéndose comprobado la existencia de armas automáticas de propiedad de la Nación en poder de particulares, se hace saber que deberán ser entregadas por sus poseedores al Arsenal Principal de Guerra dentro del plazo de 12 horas, a contar de las 6 horas del día 9 de Septiembre. En caso de que así no se hiciese, sus poseedores serán sometidos al rigor de la ley marcial.

2°. — Se invita a las personas que conozcan la tenencia de esta clase de armas en las condiciones especificadas en el párrafo 1°, a hacerlo conocer al Ministerio de Guerra.

Los bandos anteriores tuvieron el propósito esencial de mantener el orden y fueron de carácter transitorio, casi podría decirse ocasionales.

Por decreto dictado el 8 de Noviembre de 1930, se tomaron disposiciones que modificaron en el hecho la legislación penal de fondo desde que se sancionaron penas diferentes a las consignadas en aquélla, cambiándose también el procedimiento civil por el militar y la primera jurisdicción por la segunda.

Las distintas disposiciones relativas a la ley marcial fueron reunidas en un bando publicado en 6 de Febrero de 1931, el cual estableció que sería condenado a la pena



de muerte todo individuo sorprendido in fraganti en la comisión de alguno de los siguientes delitos:

Atentados contra el gobierno constituido o los miembros de los poderes públicos.

Atentados contra la seguridad pública causando incendio, explosión o inundación con peligro de muerte para las personas.

Atentados contra las tropas, materiales o medios de comunicaciones, del ejército o armada.

Atentados contra la seguridad de los medios de transporte o de comunicaciones capaces de producir, la muerte de las personas.

Atentados contra el orden público por medio de intimidación, tumultos o agresión con armas.

Agresión o resistencia armada contra la autoridad.

Atentados contra los servicios públicos imprescindibles para la población.

Homicidio cometido en banda o por cualquier medio capaz de causar grandes estragos o con el fin de compeler a tomar parte en una huelga, "boicott" o asonada. Y otros hechos de análoga gravedad.

Agrega el decreto que los que de cualquier modo inciten, conspiren o se comploten sea para la comisión de los delitos enumerados anteriormente o para provocar la indisciplina e impedir el cumplimiento de las leyes militares, serán condenados a la pena de prisión.

Igual pena sufrirán los particulares que se apropien o retengan indebidamente en su poder, armas de propiedad de la Nación, como también los que hagan ostentación de armas en la vía pública.



La aplicación de las penas impuestas en los párrafos anteriores se hará por los tribunales militares, de acuerdo con el procedimiento del juicio sumario en tiempo de paz, debiendo conocer en sus recursos el consejo supremo de guerra y marina.

Se autoriza a los comandantes de división de ejército, a los jefes de regiones navales, a los jefes de fuerzas navales y buques sueltos y al jefe de Martín García, a los efectos de la aplicación de la ley marcial, para constituir consejo de guerra especial, en los casos del inciso 3º. del artículo 53 del Código de Justicia Militar.

Se dejan sin efecto las anteriores disposiciones de la ley marcial, que quedan sustituidas por las del presente decreto.

Las autoridades policiales de todas las localidades del país, darán a este decreto la mayor difusión, fijándolo en los lugares públicos.

Conocidas las disposiciones de excepción tomadas por el Gobierno Provisional de la Nación, veamos los casos en que la ley marcial ha sido aplicada.

El 7 de Octubre de 1930 varios sujetos se trabaron en lucha en la ciudad de Avellaneda. Intervinieron en la refriega, soldados del 6 de caballería y agentes de policía que fueron agredidos a tiros por los delincuentes. Detenidos dos de los autores, que resultaron ser Gregorio Galeano y José Gatti, y comprobada la participación en los hechos y sus antecedentes como reincidentes, fueron ejecutados el día 9 en las primeras horas, siendo esos los primeros casos de aplicación de la pena de muerte.

El 8 de Enero de 1931 se fusiló en Mendoza a Pedro Iscazzatti, acusado de asaltos y crímenes en banda.



El 6 de Diciembre de 1930 se inició causa contra Florindo Gayoso, José Santos Ares y José Montero por robo, incendio y agresión con armas contra la autoridad. Condenados a muerte, el Presidente les conmutó esa pena con fecha 10 del mismo mes y año.

El 3 de Febrero de 1931 fué fusilado en la Penitenciaría Nacional, Severino de Giovanni, encausado por homicidios, atentado con armas contra la autoridad, robos y estragos.

El 4 del mismo mes y año fué ejecutado también en la Penitenciaría Paulino Scarfó acusado de homicidios, robos, atentados a la autoridad con armas y estragos.

Por fin, el 7 de Mayo fué condenado a sufrir la pena de muerte el menor Mario Gatti, acusado de atentado con armas a la autoridad y lesiones, pero el castigo no se llevó a efecto por haberle sido conmutada la pena capital.

El balance nos ofrece así nueve condenaciones a muerte de las cuales cinco se llevaron a cabo y cuatro se conmutaron por el Presidente del Gobierno Provisional.

Los conductores de vehículos Gayoso, Santos Ares y Montero condenados a muerte y conmutadas sus penas por la de reclusión perpetua, fueron a su vez indultados y puestos en libertad por orden del Presidente de la República en Noviembre de 1932, hecho este que demostraría palmariamente la ligereza de la sentencia que les impuso la pena capital.

Los bandos marciales del gobierno provisional no tuvieron la eficacia intimidatoria en que se pensó, como lo demuestran las cifras de la estadística.



Veamos en efecto lo que documenta la policía de la Capital en el año 1930. El primer trimestre y el segundo transcurren sin ley marcial, el cuarto pasa bajo el imperio de la misma y el tercero comprende los meses de Julio, Agosto y seis días de Setiembre en que no hubo medidas extraordinarias y veinte y cuatro días de ese mismo mes bajo las circunstancias especiales. Los números son reveladores.

En el primer trimestre se cometieron 3.910 delitos; en el segundo 3.579; en el tercero 3.947 y en el cuarto 4.296. Quiere decir así que dentro de un mismo año, el número de delitos fué mayor cuando dominaron las medidas de emergencia.

De esos delitos en conjunto se cometieron en el primer trimestre 990 contra las personas y 1.441 contra la propiedad; en el segundo 787 y 1.610; en el tercero 794 y 1.771; y en el cuarto 920 y 1.786 respectivamente.

En 1931 los delitos ascendieron a 16.141, de los cuales 3.559 fueron contra las personas y 6.920 contra la propiedad. Si esas cifras se comparan con las de años anteriores, se comprueba un aumento con referencia a 1930, 1929, 1928 y 1927, lo que quiere decir que los rigores de la ley marcial y las amenazas de la pena de muerte no consiguieron intimidar a los delincuentes.

Los datos estadísticos referentes a la provincia de Buenos Aires, registran en cambio una disminución de delitos durante el año 1931, pues el total fué de 14.912 frente a 16.996 de 1930, 17.737 de 1929 y 17.387 de 1928. Si se tomasen esos elementos de juicio aisladamente, podríamos llegar a conclusiones erróneas pero si se com-



paran con otros, las nociones se integran con mayor acierto.

Refiriéndome a la planilla antes publicada, percibimos que desde 1920 hasta 1932 los años de menor criminalidad han sido:

1923	con	13.928
1924	>	14.442
1922	>	14.605
1925	>	14.833 y
1931	>	14.912 delitos.

Se comprueba así que en los últimos doce años los números han variado sin seguir una progresión y que dentro de esas unidades de tiempo, el año 1931 se encuentra en quinto lugar, anotándose cuatro años con índice menor de criminalidad.

Las variaciones en consecuencia obedecen a causas diferentes a las derivadas de la penalidad, desde que en cuatro años sin represiones especiales, el número de delitos ha sido menor que en el año en el cual rigieron los rigores de la ley marcial.

En cuanto a la proporción de aprehendidos y fugados, tampoco se alteró a mérito de las medidas excepcionales, como lo comprueban los datos registrados antes.

La delincuencia organizada e impune se permitió además consumir un verdadero desafío a la autoridad militar con el sonado crimen de Avellaneda. Las dos ejecuciones llevadas a cabo en este punto, fueron ordenadas por un jefe del ejército, el señor Mayor Rosasco, contra quien se desataron las furias de los malhechores,



Estos que habían jurado venganza la consumaron con toda impunidad, por cuanto una noche mientras el Mayor Rosasco comía en un restaurante, fué ultimado a balazos por autores desconocidos que penetraron espectacularmente en el establecimiento y realizaron el crimen sin dificultad.

Los protagonistas de ese asesinato no han sido capturados por las policías, habiendo por tanto escapado a las sanciones de la justicia.

La derogación de los bandos del gobierno provisional que como se ha visto no dieron los resultados propuestos, se operó poco después del asesinato de Avellaneda, volviéndose al imperio normal de la ley, sin que se produjeran nuevas alteraciones. Quedó un saldo de cinco ejecuciones y cuatro conmutaciones, tres de estas convertidas en libertad definitiva por el gobierno posterior, que acreditó con su acto la injusticia de un fallo que de haberse hecho efectivo hubiera importado un acontecimiento tan injusto como irreparable.

Los observadores de las nuevas formas de la delincuencia que se manifiestan partidarios de la pena de muerte con el objeto de contener el crimen, creyendo en su eficacia, olvidan la presencia de factores que caen diariamente bajo el dominio de sus sentidos.

La pena de muerte no existe en la ley, pero concurre en los hechos, desde que la autoridad policial la hace efectiva en todos los casos de resistencia a mano armada, de agresión o de atentado con armas.

Los delincuentes lo saben y sin embargo los profesionales de las nuevas formas, desafían jactanciosamente



a la sociedad, produciendo los actos que llevan a la represión máxima cuando a la policía le toca intervenir. El temor a la ejecución inmediata no los conmueve y continúan impasibles en sus actividades anti sociales.

Con estos antecedentes tan inmediatos, tan conocidos, tan vividos, tan documentados, se piensa todavía en resolver la cuestión penal levantando cadalsos y aumentando las penas en medio del coro de delincuentes que ríen de la represión cualesquiera que sea, porque las autoridades no los aprehenden, porque eluden la acción de la justicia, o porque se escapan de las cárceles, mostrando que lo único positivo en relación con sus actividades es la impunidad, no por ausencia de leyes sino por falta de eficacia en la custodia de los derechos más fundamentales.



LA PRESCRIPCION PENAL Y LA LENTITUD DE LOS PROCESOS



La lentitud de los procesos es proverbial entre nosotros. Influyen para eso no sólo los diferentes rodajes que se ponen en movimiento cuando se ejecuta un hecho calificado de delito, sino las disposiciones de las leyes y las costumbres de los magistrados y demás auxiliares de la administración de justicia.

En la Capital Federal el sumario se entrega a la Policía y a los jueces de Instrucción. Estos últimos son no sólo los encargados de formar el proceso sino también de juzgar, desde que les corresponde cuando han reunido los elementos necesarios verificar un pronunciamiento que puede tener diferentes alcances.

El juez de instrucción en efecto, si encuentra que los antecedentes acumulados acreditan de una manera evidente la inexistencia de delito o la inculpabilidad del acusado, debe dictar auto de sobreseimiento definitivo y si los elementos no son suficientes para señalar un autor o caracterizar una infracción corresponde un sobresei-



miento provisorio el cual mantiene el asunto en suspenso.

Cuando por el contrario, entiende que la causa debe llevarse adelante, por el carácter de los hechos imputados y las responsabilidades de la persona o personas acusadas, el proceso es elevado a plenario, esto es destinado a su discusión plena, con acusación, defensa y prueba antes de la sentencia.

Esta segunda etapa del proceso no implica una segunda instancia, pero en los hechos tiene el alcance de tal produciéndose en instrucción, pruebas, defensas, imputaciones, discusiones y pronunciamientos.

En plenario se cuenta con dos instancias representadas por jueces y cámara, a lo cual se agrega en ciertos casos el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Nación.

En las provincias dominan sistemas análogos y aun cuando difiere la organización judicial, hay en todas un sumario a cargo de jueces, un plenario que tramita el mismo magistrado del plenario u otro y un juicio con dos instancias.

Todo esto unido a nuestras prácticas forenses, hace que los procesos demoren considerablemente y que el reconocimiento de la inocencia o la sanción de la culpabilidad necesiten, aún para casos triviales, un largo lapso de tiempo.

Nunca he podido comprender por qué se requiere un término considerable para juzgar al autor de un hecho calificado por la ley como delito. Y no he podido tampoco entender porque se propicia la recepción de la prueba



después de haber transcurrido un largo término desde que los hechos tuvieron lugar.

Observemos en efecto como se desenvuelven los hechos producidos ante la justicia represiva en nuestro país.

Se comete un homicidio por ejemplo y la policía recibe las primeras informaciones. El sumario es secreto y en ese carácter se toma declaración a los testigos presenciales los que solamente son interrogados por la autoridad representada por el instructor y a veces por el fiscal que ejerce el Ministerio Público y cuya misión es casi siempre la de acusar.

Esas diligencias no forman sino los elementos para el sumario, desde que el juicio pleno se hace en el plenario cuando corresponde elevar las actuaciones al juez de sentencia. Pasa el tiempo, el tal sumario termina y meses después de ocurrido el hecho, a veces años más tarde, los testigos presenciales son llamados a declarar en audiencia pública donde puede repreguntarlos el defensor y el acusador.

Los testigos en esa época no pueden tener presente el suceso en los detalles y no obstante eso, es tal el momento en el que deben expedirse ante el contralor de los que discuten los hechos para sacar las consecuencias correspondientes.

Las declaraciones del sumario han sido tomadas o por empleados policiales o por empleados de la secretaría de los juzgados de instrucción o por los secretarios o por los jueces, es decir por personas que no son las llamadas a resolver el asunto sino en los casos de sobreseimiento,



en los que interesa especialmente la impresión individual del magistrado tan necesaria para formar acertado criterio.

Las declaraciones del plenario deben ser recibidas por el juez, pero debido a múltiples factores no son éstos generalmente quienes las toman, de manera que el magistrado resuelve siempre después de leer uno o varios legajos de papeles, que han sido preparados por otros y que no han contado con su intervención personal.

He pensado siempre, que producido un hecho criminal, las pruebas debían recogerse de inmediato, y en un término breve someterse al tribunal encargado de apreciarlas en definitiva con la concurrencia pública de la acusación y la defensa para que se produzca el pronunciamiento lo más brevemente posible. Demorar años el juicio de un hecho calificado de delito por la ley, supone una defensa social insuficiente y la consumación de frecuentes injusticias.

El código penal, que solamente legisla sobre el fondo no podía resolver las cuestiones de forma, pero tenía la posibilidad de construir previendo modificaciones procesales que se adaptasen más a las aspiraciones de una sociedad culta.

Los preceptos sobre prescripción que han motivado críticas posteriores fueron colocados en la ley, precisamente para que sirvieran de acicate a una modificación procesal civilizadora.

Antes de la reforma iniciada en 1916, todo acto directo del procedimiento contra la persona del delincuente, dentro del término de la prescripción, la inte-



rrumpía. De manera que iniciada una causa podía mantenerse viva la acción por tiempo indeterminado, siempre que se realizaran de tiempo en tiempo actos de procedimiento en el proceso contra la persona acusada o condenada. Esos actos debían ser directos contra el encausado o penado, no considerándose tales las diligencias de otro carácter que se produjeran en la causa.

El sistema tenía en mi concepto graves inconvenientes desde que podía alargar indefinidamente las causas, producir en casos iguales consecuencias distintas y provocar sanciones capaces de aparejar perjuicios sociales en lugar de beneficios.

En los delitos que por su naturaleza son castigados con sanciones severas, de reclusión o prisión, la prescripción de la acción es muy difícil cuando el acusado ha sido aprehendido, desde que el tiempo de aquella correspondiente al de la pena es muy largo, y la causa por más lento que sea su trámite termina antes de que pueda producirse. En cambio cuando el delito es de menos importancia y se encuentra castigado con penas de tres años o menos, si la prescripción no excede esos términos, puede operarse durante la secuela del proceso, si no se establece la interrupción de la prescripción.

El problema se planteaba así en términos claros. Producido el hecho, la acción considerada como un derecho de perseguir al autor, surge de inmediato y desde ese momento empieza también a contarse la prescripción que se consuma cuando ha transcurrido un lapso de tiempo determinado a partir del momento inicial.



Si la prescripción no se interrumpe por acto alguno de procedimiento, la acción queda extinguida al finalizar el término, aun cuando el proceso se haya seguido y la justicia haya estado actuando. Pero si se autoriza la interrupción por actos de procedimiento, la concurrencia de los mismos enerva la prescripción y cualesquiera sea el tiempo que dure la causa, la sentencia con todos sus efectos se puede hacer sentir mucho después de consumado el delito.

Con este último sistema se puede aplicar una pena a un acusado excarcelado muchos, pero muchos años después de haberse cometido el delito y cuando sus circunstancias personales mismas hubieran variado aún profundamente.

Las causas en esas condiciones pueden no tener fin y un acusado puede pasar su vida entera o gran parte de ella bajo proceso y en continua incertidumbre.

La justicia que en todos los órdenes debe ser uniforme, puede con el sistema anterior a la reforma, dar lugar a resultados diferentes en casos de delitos iguales. Bastaría que en uno se hubiese actuado directamente y en el otro no, para que en el primero se operase la prescripción y en el otro se dictase sentencia condenatoria, después de haber transcurrido el término dentro del cual aquella tuvo lugar.

Las penas tienen por lo demás un objeto de defensa social y deben aplicarse en cuanto sea necesario para llenar aquel objeto. Una condena tardía es inconveniente para el individuo e indiferente o perjudicial para la sociedad.



Recuerdo un caso práctico de mi actuación profesional.

Un empleado público de la administración en la Capital Federal fué acusado por un superior jerárquico, que obtuvo la destitución del mismo alegando que el exonerado le había formulado cargos infundados. La acción no se detuvo ahí, pues considerándose calumniado él mismo entabló contra su anterior subordinado la querella correspondiente. El acusado no atendió el juicio. Carecía de medios de vida y salió de la Capital empleándose en una Provincia. Estuvo allí durante dos años al cabo de los cuales se radicó en el norte del país donde se dedicó a trabajar en una industria. Estando allí contrajo matrimonio y fué padre de familia. Cinco años después de la querella, cuando estaba desapercibido de la misma y de todos sus episodios recibió la noticia de la condena. El acusador lo había perseguido tenazmente, había provocado actos de procedimiento directos y había llegado hasta obtener la sentencia condenatoria producida cuando el hecho estaba olvidado y las condiciones de vida del querellado cambiadas.

En casos de esta naturaleza la aplicación de una pena tardía aparece consecuencia perjudiciales bajo ambos puntos de vista, el personal y el social.

Si las causas criminales se sustanciasen con rapidez y si la solución judicial sobreviniera poco tiempo después de haberse producido el hecho, es indudable que nada importaría el sistema de prescripción adoptado en la ley desde que aquella no podría operarse sino en el caso de no poderse seguir el proceso por no haberse descu-



bierto a los autores o por encontrarse prófugos los imputados.

La prescripción de la acción durante la secuela de la causa sólo puede tener lugar por la demora de la misma, de manera que al plantearse la cuestión debe decidirse entre dos soluciones posibles: la una consistente en aumentar considerablemente los términos para la prescripción y la otra en apresurar los trámites de las causas y resolverlas dentro de plazos prudenciales. El primer sistema sanciona la inercia, el segundo la hace desaparecer.

La ampliación de los términos o la interrupción serían admisibles si la resolución de una causa criminal necesitara largos periodos de tiempo para su trámite y terminación. A nadie sin embargo se le ocurre sostener que eso sea preciso y no obstante eso, muchos, incluso los que abogan por la rapidez, se detienen a la mitad del camino y no contribuyen a una transformación de nuestras malas prácticas.

Obsérvese que no se trata de resolver las causas criminales en horas, ni en días desde que la prescripción se opera en los casos de penalidades más reducidas a los dos años de la fecha en que se consumó el delito, lo que quiere decir que si las causas se terminan dentro de ese tiempo la prescripción no se puede producir.

Es entonces el caso de preguntar si dos años no es un término suficientemente amplio para que un proceso criminal o correccional concluya de manera definitiva.

Me ha parecido siempre inconcebible, que en un plazo no digo de dos años, de seis meses, no se pueda establecer si una persona acusada y presente en el pro-



ceso, es o no autora de la infracción imputada. Lo que no puede hacerse en un término breve, recogiendo los elementos de juicio de inmediato, no será posible realizarlo sin alteración de la verdad, en un periodo más largo. Puede ser una táctica para la defensa de causas malas la demora, capaz de producir el olvido, aplacar las pasiones y despertar conmiseración, pero eso mismo no puede recomendarse como un medio eficaz para defender a la sociedad.

En esta materia suele incurrirse en confusiones derivadas de no tener presente los fundamentos de las instituciones jurídicas. La prescripción que es la misma en sus efectos en el orden civil y en el criminal, tiene distintos alcances en una y otra jurisdicciones y hasta diferentes matices en los fundamentos.

En general la prescripción en el orden jurídico deriva de la propia naturaleza humana, cuyas personas son transitorias y olvidan. Bajo el aspecto represivo el transcurso del tiempo quita el interés al castigo de un sujeto que demuestra no reincidiendo su adaptación a la vida social. Además la posibilidad de reunir las pruebas necesarias para el pronunciamiento, se aleja con el tiempo no sólo debido a la pérdida o disminución de los recuerdos sino a la desaparición de los que podrían prestar el concurso de sus declaraciones. Por último para que exista estabilidad social es preciso que los derechos no sean inciertos y esto sólo se consigue fijando términos para las acciones.

En el orden civil entre tanto, existen dos clases de intereses bien destacados: los personales del tenedor del derecho y los de la sociedad que los ampara. Esta última



por medio de la ley fija términos para el ejercicio y sanciona la inacción con la pérdida, pero mientras el titular del derecho mantiene su reclamo, el mismo perdura. De manera que en este orden de cosas donde hay un sujeto que persigue el cumplimiento de una obligación y un afectado por la misma que debe cumplirla, el derecho se mantiene por la voluntad del acreedor. En materia penal no hay deudores ni acreedores, existiendo sólo un autor de delito que debe cumplir una sanción impuesta por la sociedad a su infracción. Concorre solamente un interés social desde que las responsabilidades por daños y las consistentes en indemnizaciones se rigen de acuerdo a los preceptos civiles.

No existiendo en consecuencia un vínculo entre la víctima y el delincuente, fuera del relativo al perjuicio, la acción penal no puede mantenerse viva por la voluntad del afectado. La sociedad cuando se trata de relaciones personales, permite al titular del derecho la renuncia a su derecho, pues sólo de él depende su ejercicio, pero tratándose de cuestiones sociales, sólo la sociedad puede regirlas y así como el perdón de la víctima no extingue la acción salvo casos excepcionales, la persecución de la misma no puede influir para que el derecho se mantenga o se pierda. Me trata de cuestiones de interés y de orden social, ajenas a las acciones puramente individuales.

El Congreso Argentino cuando suprimió los preceptos relativos a la interrupción de la prescripción, siguiendo los consejos que diera en su obra "La Reforma Penal" el Dr. Julio Herrera, lo hizo contrayendo un compromiso que permanece incumplido y relacionado con la reforma



procesal. Se entendió que ésta vendría de inmediato, que los trámites de las causas se apresurarían y que por tanto la prescripción del proceso en marcha no podría tener lugar.

Han pasado más de diez años y como la obra no se ha llevado a cabo, los factores antiguos gravitan en la misma forma que diera lugar a repetidas críticas. Las causas criminales se demoran, el pesado mecanismo se mantiene y la prescripción tiene lugar frecuentemente dejándose sin definir situaciones que debieron resolverse.

La inercia criolla ha hecho más: ha creado el *modus vivendi* de la prescripción, llegándose a la misma deliberadamente. En las causas de injuria y calumnia por ejemplo, que son casi siempre molestas a los magistrados, de antemano se sabe que se buscará la manera de alargarlas para llegar después de tres años a la prescripción y burlar así al que buscó satisfacciones en la justicia.

Pero, ¿de todo esto se desprende que deban alargarse los términos o volver al sistema de la interrupción?

En mi opinión hacerlo constituiría no solamente un error, sino una nueva orientación legislativa consistente en apuntalar los sistemas inconvenientes y dilatar la solución por mucho tiempo más.

Los procesos criminales en marcha se prescriben debido a las largas demoras en la tramitación. La prescripción no debe evitarse alargando los términos, o autorizando interrupciones sino simplificando los procedimientos y acortando las soluciones.



Si el congreso siguiera un camino diferente rectificaría la obra iniciada a la cual contribuyeron hombres que continúan en la acción de gobierno.

A las personas del público en general para quienes se escriben los artículos de los diarios, se les impresiona fácilmente y se les convence de la ineficacia de una ley cuando se les presentan ciertos hechos y no se les explican antecedentes o motivos, ni se les exhiben los diversos aspectos de la cuestión. Mostrar que un proceso en marcha en el cual se espera resolución, no puede ser objeto de pronunciamiento porque se prescribe dejándose en la duda la situación moral de la parte acusada, es indudablemente destacar una falla del mecanismo legal. Pero si se revela con verdad que a esa consecuencia se llega debido a la demora innecesaria en la sustanciación y a causa de las atrasadas disposiciones procesales, el juicio se forma completo y la consecuencia surge clara e indiscutida. La deficiencia no se percibe en la ley de fondo, sino en la de forma, siendo precisa la reforma de la segunda y no la modificación de la primera.

Con procedimientos rápidos, la prescripción no podrá operarse, la solución para cada acusado se tendrá dentro de términos adecuados y las situaciones de injusticia que se producen con los pronunciamientos muy alejados del momento en que tuvieron lugar los sucesos, no podrán tener lugar.

El problema se encuentra así en la reforma procesal y no en la alteración del sistema consagrado por el código penal vigente.

LA REFORMA PROCESAL



La necesidad de modificar sustancialmente el código de procedimientos fué planteada en el Congreso como una consecuencia de la reforma penal.

Recordaré al respecto los antecedentes tomados de una publicación oficial de la Cámara de Diputados. Se trata de los trabajos de la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria editados en 1925. Dicha comisión estaba compuesta en la siguiente forma, durante los años 1924 y 1925.

Presidente: Dr. Rodolfo Moreno (hijo)

Secretario: Dr. Antonio de Tomaso

Vocales: Dres. Miguel A. Aráoz, Leopoldo Bard, Edgardo J. Miguez, Manuel Pinto (h.) y señor Pascual Subiza.

Dicha Comisión fué especialmente encargada de redactar un código de procedimientos en lo criminal y correccional para la Capital, Territorios Nacionales y fuero federal.

Por su parte el Senado en sesión del 17 de Julio de 1923 había resuelto invitar a la Cámara de Diputados a



designar una Comisión, que en unión de la de códigos de ese alto cuerpo estudiara la reforma procesal en el orden criminal y correccional para todos los fueros y jurisdicciones. En setiembre de 1924 la Cámara de Diputados designó a la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria para colaborar con la Comisión de Códigos del Senado en la preparación de la reforma del procedimiento penal constituyéndose la Comisión interparlamentaria el 21 de Junio de 1925 en la siguiente forma:

Presidente: Diputado Dr. Rodolfo Moreno (hijo).

Vocales: Senadores Dres. Mario Bravo, Pedro Llanos y Leopoldo Melo y Diputados Dres. Manuel Pinto (hijo) y Antonio de Tomaso.

A la Comisión de diputados, para poner en marcha el propósito, presenté las siguientes bases destinadas a la reforma del procedimiento penal:

1ª. — El código deberá legislar no sólo sobre el procedimiento sino acerca de la organización de la justicia, reemplazando así al Código de Procedimientos vigente y a la ley Orgánica de los Tribunales en la parte que corresponda.

2ª. — La ley nueva regirá en la Capital de la República y se adaptará a los territorios nacionales en cuanto sea posible, colocándose las reglas especiales que sea preciso para estos últimos.

3ª. — El juicio será siempre oral.

4ª. — Para los delitos más graves la formación del sumario estará a cargo de un juez instructor.



En el sumario se reunirán constancias escritas; éste no durará más de veinte días y podrá ser secreto durante los diez primeros.

Se entiende que las reglas anteriores relativas a término y secreto regirán desde que exista una persona detenida.

5ª. — En los delitos a que se refiere la base anterior, el juicio será ventilado oralmente ante una Corte que resolverá en única instancia.

6ª. — Para los delitos de menor gravedad y para las faltas, el proceso se ventilará en juicio oral y público sin sumario previo. Intervendrán los jueces correccionales, los que se considerarán como miembros de una Corte especial.

7ª. — Las sentencias que se pronuncien serán definitivas y sólo procederá en ciertos casos un recurso de casación.

8ª. — Todo tribunal separará en su respectiva sentencia las cuestiones de hecho de las de derecho.

9ª. — Las incidencias de los juicios serán resueltas en la misma audiencia sin recurso alguno.

10ª. — Un proceso criminal deberá substanciararse en un plazo de tres meses, y uno correccional, en el término de un mes.

Esas bases fueron presentadas con el objeto de uniformar la opinión de la Comisión respecto al Código en proyecto. Cuando se trata de afrontar una obra de ese



carácter, es preciso saber antes de redactar los artículos de la ley, cuales son las ideas a que deben responder y así era previo conocer si se preferiría el procedimiento oral o el escrito, las diversas instancias o la instancia única, etc. Las bases debían presentarse a la Comisión de Diputados para reunir las opiniones de la misma y poderlas llevar a la de Senadores. Pensaba, como lo manifesté, que una vez acordadas esas bases, la tarea de redactar el código era relativamente fácil.

La Comisión Especial de Diputados recibió también bases redactadas por el Dr. de Tomaso y por el Dr. Aráoz, obteniendo las primeras la adhesión de penalistas tan conocidos como los Dres. Tomás Jofré, Rodolfo Rivarola y Jorge H. Frias.

Cada vez que se habla de modificar el código de procedimientos en lo criminal se plantea la vieja cuestión del juicio por jurados. El establecimiento del mismo se encuentra prescripto por los artículos 24, 67, inciso 11 y 102 de la Constitución, de manera que el sistema actual, a pesar de sus años de vigencia, es de carácter transitorio.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados cuando se avocó el estudio de este asunto y antes de aprobar las bases, consideró si debía mantenerse la legislación de emergencia o si convenía reglamentar la institución constitucional, resolviéndose por mayoría que las circunstancias actuales, imponían un cambio de sistema pero no la implantación del jurado popular. Se aceptó la instancia única y el juicio oral debiendo hacerse el pronunciamiento por jueces letrados que actuarían con el carácter de jurados.



Con esos elementos ampliamente discutidos la Comisión en pleno y con fecha 11 de Agosto de 1925, suscribió las bases definitivas las que quedaron redactadas en la siguiente forma:

- 1ª. — El juicio será oral y público.
- 2ª. — El Código deberá legislar sobre el procedimiento y la organización de la Justicia, reemplazando así al Código de Procedimientos vigente y a la ley orgánica de los Tribunales en la parte que corresponda.
- 3ª. — La nueva ley regirá en la Capital de la República y se adaptará a los territorios nacionales en cuanto sea posible. Regirá, también, en el orden federal.
- 4ª. — El juzgamiento de todos los delitos sujetos a la acción pública estará regido por el mismo procedimiento.
- 5ª. — Todo tribunal separará en su respectiva sentencia las cuestiones de hecho de las de derecho. Al pronunciarse sobre las cuestiones de hecho, procederá como jurado.
- 6ª. — La instancia será única.
- 7ª. — Habrá un sumario a cargo de un juez instructor, quien realizará personalmente todas las diligencias, no debiendo practicar actuaciones la policía ordinaria.
- 8ª. — El Tribunal determinará en que casos el juez de instrucción, con sus auxiliares, deberá instruir el sumario, a los efectos de reunir pruebas.



9ª. — Los jueces de instrucción constituirán, junto con los actuales médicos forenses, los funcionarios técnicos de la policía y los agentes de investigaciones que fueren necesarios, la policía judicial.

10ª. — El sumario será público para las partes, pero el juez instructor podrá, mediante resolución, mantenerlo en secreto durante cinco días, prorrogables solamente por otros cinco.

11ª. — El sumario no durará más de veinte días.

12ª. — Habrá una Corte de Casación.

13ª. — El Ministerio Público tendrá estabilidad e independencia.

14ª. — La acción penal será pública. Será privada o dependiente de instancia privada, en los casos de los artículos 72 y 73 del Código Penal. Será pública en todos los demás.

15ª. — El damnificado no será parte en los juicios, con excepción de los casos a que se refiere el artículo 72 del Código Penal. El mismo podrá ofrecer pruebas tendientes a la averiguación del delito y determinación de los daños.

16ª. — Todo acusado será defendido por un defensor oficial o por el abogado de la matrícula que sortee el Tribunal de la lista de profesionales que deberá formarse, hasta que sea substituido por el que propusiere el encausado, cuando hiciere uso de ese derecho.

17ª. — El Tribunal se pronunciará, al obrar como



jurado, sobre las cuestiones de hecho planteadas por el Ministerio Público y la defensa.

18ª. — La detención será limitada, debiendo fijarse su duración de acuerdo con su objeto transitorio.

19ª. — La prisión preventiva será decretada por el Tribunal, en auto fundado y no se hará efectiva sino cuando éste lo juzgara indispensable, en razón de la gravedad del delito o a los efectos de asegurar al delincuente.

20ª. — Se ampliará el amparo de habeas corpus, reglamentándose detalladamente cuáles son las órdenes ilegales y la concesión de los recursos contra las mismas.

21ª. — Deberán ampliarse los casos en que proceda la eximición de prisión.

22ª. — Las faltas (contravenciones municipales y policiales) serán juzgadas, también, por un Tribunal en instancia única y en juicio oral y público, aplicando disposiciones referentes a esa materia.

23ª. — Habrá un Tribunal especial para menores, cuyos miembros deberán ser padres o madres de familia.

Las bases transcritas son de plena actualidad y proporcionan un cimiento definitivo para la reforma procesal que debe afrontarse. La redacción del código si esos principios se adoptan puede terminarse en poco tiempo y proporcionarse un instrumento jurídico que permita juzgar con rapidez y definir las situaciones indi-

viduales en la forma que han adoptado los países más cultos y serios.

Esos principios contaron en su hora con la adhesión del Poder Ejecutivo, pues el Ministerio de Justicia, que lo era el Dr. Antonio Sagarna, llevó al seno de la Comisión la opinión del mismo deliberando en diferentes oportunidades con referencia a los puntos fundamentales.



LOS FOCOS DE LA MALA VIDA



En todos los países del mundo y especialmente en los centros más poblados de los mismos, actúan organizaciones criminales contra las cuales se requiere una defensa constante y enérgica.

En la República Argentina la existencia de esas bandas se ha puesto de manifiesto especialmente en los últimos tiempos y la eficacia de las mismas no ha sido quebrantada por el esfuerzo de las autoridades. Las capturas aisladas, y las represiones producidas han sido muy escasas en relación a los atentados consumados, acreditando el balance la frecuente impunidad que atestiguan las estadísticas oficiales.

En los casos de acción material y en las batallas campales libradas con los delincuentes la policía, cuya conducta ha sido generalmente heroica, ha visto sacrificados a meritorios empleados sin terminar siempre los encuentros con la victoria de sus fuerzas.

Hay sin duda alguna y los hechos diarios lo demuestran, una delincuencia regimentada que tiene en



jaque a las autoridades. La impunidad que es el éxito, alienta a esos elementos haciéndolos cada día más audaces y más peligrosos para la estabilidad social. Urge en consecuencia la acción contra los mismos y para ello no es lo principal reformar las leyes represivas sino aplicarlas destruyendo las guaridas y sometiendo a la justicia sin contemplaciones a los autores de delitos. Una malsana tolerancia con sujetos que son perniciosos para la vida de la gente honesta y para la tranquilidad general, ha sido corriente entre nosotros y los males derivados de esas costumbres no han desaparecido aún.

Entre los detestables elementos tolerados, consentidos o estimulados se cuentan los guapos de profesión, los batidores, los tratantes de blancas y los jugadores de oficio.

Profesionales del valor. — Debido a la incultura en nuestras luchas comiciales y a las malas prácticas que se emplean para las mismas, el matón profesional suele jugar un rol importante en los partidos políticos que se disputan el predominio electoral.

El guapo de comité es un sujeto que no trabaja, que no sabe hacerlo, que no tiene profesión y que vive acompañando a los caudillos, proyectando o cometiendo fechorías contra los adversarios y gozando de verdaderas inmunidades para todos sus atropellos. El juego, el alcohol y la casa de prostitución son los complementos de su vida perjudicial y deshonesto. A veces los guapos profesionales capitanean grupos y forman verdaderas bandas constituidas por sujetos que no pueden exhibir sus medios



de vida, que no trabajan en nada, que gastan sin embargo y que sólo actúan ostensiblemente en los prolegomenos electorales.

Para destruir esas bandas y producir un saneamiento social será necesario chocar con muchos intereses creados, pero la nobleza y la utilidad del propósito, justificará el empleo de toda la energía precisa para atacar el mal en sus raíces.

No se podrá intentar con éxito la defensa completa de la sociedad argentina, mientras no se extirpen los focos verdaderos de la enfermedad y no se ataquen sin contemplaciones para nadie los elementos morbosos.

Hablar científicamente de sujetos en estado peligroso con o sin delito y de otras cosas parecidas, de las cuales se ocupa la ciencia contemporánea tendiendo a la mejor defensa social, sin ocuparse de concluir con los elementos que se encuentran a la vista y que son perniciosos bajo todos sus aspectos, equivale a divagar cuando se requiere la acción y la práctica.

La opinión pública recuerda todavía con doloroso asombro el crimen inaudito ejecutado en Lincoln en la noche del 13 de Febrero de 1930. Una manifestación política reunida en ejercicio de derechos indiscutibles y con los permisos correspondientes, fué disuelta a balazos por gente que apostada en la oscuridad disparó sobre la multitud desarmada que llenaba la plaza principal del pueblo, sin contener el desmán la presencia de señoras, señoritas y niños. En el lugar quedaron varios muertos y numerosos heridos, no habiendo sido hasta hoy individualizados los autores. Poco antes de ese suceso había



ocurrido otro, en plena Capital y en un sitio tan céntrico como la plaza 11 de Setiembre. Allí también se asaltó una manifestación política, se hirió y se asesinó, sin haberse encontrado a los autores materiales, ni a los instigadores. Los criminales en ambos casos han gozado de la más perfecta impunidad.

El sistema como tal, perdura todavía y si bien los atentados de aquélla clase no han tenido oportunidad de repetirse, el tipo del matón profesional, ajeno al trabajo, se mantiene como una pústula que pone de manifiesto un mal de nuestro organismo que no se ataca con eficacia.

Los baidores. — Así como los partidos políticos suelen tolerar como instituciones a los guarda-espaldas, los muchachos de acción y los matones profesionales, nuestros policías se valen de los batidores para el descubrimiento de los delitos.

El batidor es el sujeto que refiere a los funcionarios policiales lo que sabe respecto a sus compañeros de actividades. Los policías emplean también a los confidentes o sea sujetos que los tienen al cabo de los movimientos de los individuos a quienes se sindicó como peligrosos.

El contacto de policías con delincuentes para cuidar mejor a la sociedad contra los ataques de los últimos, me ha parecido siempre pernicioso y lejos de ser en mi concepto sano y conveniente, es el sistema de todo punto perjudicial. Ese vínculo de unión pudo explicarse en determinadas organizaciones policiales, que terminaron en la forma que es de pública notoriedad, pero no puede



admitirse como un procedimiento normal de custodia social.

Policía y delincuencia son términos adversarios que no pueden tener más que un contacto: el de la represión a ejercerse por la primera en contra de la segunda. Otra clase de aproximación es corruptora porque impone la tolerancia de la autoridad con relación a los delincuentes que le sirven de agentes.

La amistad entre los encargados de cuidar el orden y los profesionales de su alteración no es siquiera confesable y se presta, cuando se practica a todos los extremos de la corrupción.

El contacto fraternal de la policía con los exponentes de la mala vida, es más probable que pervierta a los primeros y no que regenere a los segundos.

Los tratantes de blancas. — El peligro social que representan las organizaciones dedicadas a la trata de blancas no se discute. Teóricos y prácticos se encuentran de acuerdo en sostener, no sólo que se trata de una lacra, sino de una incubadora para toda clase de delitos. La trata de blancas que supone una falta completa de sentimientos morales estimula el desarrollo de todos los vicios, corrompe sujetos y forma individuos peligrosos. La relación entre delincuentes profesionales, mujeres de mala vida y rufianes, es siempre frecuente y se pone de manifiesto cuando se investigan los episodios del bajo fondo.

El código penal siguiendo las previsiones contenidas en el proyecto del año 1906 y en la ley que se sancionó



por iniciativa del Doctor Alfredo L. Palacios, colocó preceptos destinados a combatir con eficacia a los castens en todas sus categorías. Se reprimen allí a todos los que promueven o facilitan la prostitución o corrupción de menores con ánimo de lucro y a los que realizan esos mismos actos con mayores de edad mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otro medio de coerción.

El ejercicio de la prostitución por parte de mayores de edad no se reprime, cuando el mismo no infringe preceptos relativos a la moral o al orden públicos.

Pero en los hechos la prostitución voluntaria es excepcional. Las mujeres que se dedican a ese comercio se encuentran bajo la dependencia y administración de grandes o pequeños empresarios, a veces, dentro de establecimientos destinados a esas actividades, a veces fuera de los mismos, pero bajo la vigilancia y acción de los explotadores.

Las mujeres no tienen categoría de personas, sino de objetos, los traficantes las compran, las venden, las alquilan y las transfieren, llegándose a efectuar entre los tratantes, remates al mejor postor de las desgraciadas que han caído dentro del engranaje.

Los grandes empresarios, que son a la vez importadores de mujeres, son en su casi totalidad extranjeros y las policías los conocen perfectamente bien. Los pronuarios que se conservan en los archivos son completos y allí constan todos los detalles de sus hazañas. En general se trata de sujetos afincados, ostentando algunos, por un lado, una vida regular de familia o de comercio



para disfrazar sus verdaderas actividades y por otro su profesión real, tan peligrosa y tan funesta para muchas gentes a quienes apartan de la senda correcta.

Contra esos individuos se toman de vez en cuando medidas de represión, consistentes en arresto para lo cual se les sorprende en los sitios de reunión conocidos, pero casi siempre poco después de las acciones punitivas, son puestos en libertad hasta una nueva acometida. Los entendidos en esa clase de actividades cuando se les interroga sobre los motivos de esas actuaciones y sobre todo acerca de la ineficacia de fondo que tienen tales medidas espasmódicas y transitorias, sonríen enigmáticamente y recuerdan el viejo refrán: Poderoso caballero, es Don Dinero.

Pero cualesquiera sean las suspicacias y los comentarios hay hechos que no pueden discutirse. En la ciudad de Buenos Aires, en la Provincia del mismo nombre, y en ciudades del interior, existen organizaciones conocidas de traficantes, cuyos jefes extranjeros se encuentran prontuariados en las policías, las cuales conocen sus actividades. Esos sujetos constituyen un peligro social, a su alrededor se forman delincuentes y se corrompen numerosas personas, los centros en los cuales se manejan son antros de corrupción y sin embargo, a pesar de todo actúan y continúan actuando, sin que se use a su respecto la deportación, para la cual, en medio de la deficiencia de nuestras leyes, está autorizado el Poder Ejecutivo nacional.

En la Capital y en las Provincias, las autoridades locales tardan en iniciar una campaña de verdad para



pedir al Ministerio del Interior la expulsión de esos indeseables, peligrosos, mucho más peligrosos que los agitadores contra los cuales se toman frecuentemente medidas de precaución.

En el sonado proceso de la sociedad Migdal, la justicia de instrucción puso de manifiesto la existencia de una vasta asociación tenebrosa, pero el auto de procesamiento dictado el 26 de Setiembre de 1930 fué revocado por la Cámara.

Los hechos sin embargo eran reveladores del mal y comprobaron la presencia de la organización formada por extranjeros tratantes, importadores y explotadores de mujeres, pero los descubrimientos no se tradujeron en las medidas reclamadas por las circunstancias.

Los jugadores profesionales. — La tolerancia y a veces el amparo para los jugadores profesionales constituye otra de las características que se oponen al saneamiento de nuestro medio en la lucha que plantea la delincuencia.

Es sabido que tanto en la Nación como en las provincias existen leyes contra el juego, pero es de pública notoriedad que las mismas se violan con la frecuente tolerancia de las autoridades encargadas de la represión.

Las utilidades que aquél produce son tentadoras acreditando su monto las crecidas patentes que se pagan por concesiones temporales en los casinos autorizados, la puja para conseguirlas y tanto las comisiones como las ventajas que se ofrecen por los permisos.

Hay en el país capitalistas para toda clase de empresas a base de juego, algunas ostensibles, otras ocultas, pero todas persiguiendo idénticas finalidades.



Los jugadores profesionales a que me refiero como a otra de las lacras sociales de necesaria persecución, son los sujetos que se ocupan exclusivamente del fomento del juego, no teniendo más medio de subsistencia que las utilidades clandestinas producidas por el mismo.

Los empresarios e intermediarios de quinielas, redobladas, loterías sin responsabilidad, rifas no autorizadas, los pequeros y los coimeros son siempre sujetos perniciosos para la estabilidad social. Sin embargo la persecución contra los mismos no es ni enérgica, ni constante, ni eficaz. Por motivos que no pueden documentarse, pero que se sospechan, hay sujetos que tienen campo libre para sus operaciones y que actúan con evidente conocimiento de las autoridades llamados a reprimirlos.

Una campaña de saneamiento se impone para terminar con esas inconvenientes actividades, las que deben epilogarse con la deportación de los elementos indeseables cuando fueren extranjeros.

La policía de la Capital cuya sección de identificaciones se encuentra muy bien organizada, registra los antecedentes de casi todos los sujetos peligrosos, de manera que la persecución de los mismos no es difícil. Es cuestión de afrontar la tarea y no cejar en el desarrollo de la misma ante ninguno de los obstáculos que se oponen, siempre cuando se trata de moralizar en contra de los que tienen dinero, influencia o vinculaciones,



LAS EVASIONES

Cuando en 1923 se evadió de la Penitenciaría Nacional un grupo de penados, los que escavaron un túnel desde el interior por el cual salieron cómodamente, se produjo un movimiento de sorpresa y todos se preocuparon del peligro representado por ese hecho. En esos momentos la penitenciaría se encontraba intervenida especialmente por el Poder Ejecutivo y sumariadas por la intervención las autoridades del establecimiento. Probablemente las preocupaciones de ese sumario dieron lugar al evidente descuido que permitió la ruidosa evasión. El asunto fué llevado hasta el Congreso, habiendo sido interpelado en la Cámara de Diputados, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Pero en nuestro medio impresionista los acontecimientos se olvidan con rapidez y algún tiempo después de la evasión, nadie se acordaba de la fuga y no se tenía en cuenta un hecho de gravedad mayor o sea el éxito del suceso, por cuanto los evadidos gozaban de libertad y las autoridades habían resultado ineficaces para capturarlos.





Las evasiones se han venido repitiendo desde entonces y hoy constituyen un medio casi normal de concluir o de suspender la tramitación de los procesos.

Se han producido evasiones en la cárcel de encausados de la Capital, en la Correccional de Mujeres, en el Departamento de Policía, en los Hospitales, en la Alcaldía de los Tribunales, en las comisarías seccionales, en las secretarías de los juzgados, en el puerto y desde el vapor que conducía condenados a Ushuaia y en general en todos los lugares donde se encierran detenidos en carácter de procesados o penados.

En la casi totalidad de los casos el éxito corona los esfuerzos de los evadidos, pues la autoridad no consigue reintegrarlos a los establecimientos de reclusión. Se ha llegado hasta asaltar un carro celular de la policía para libertar a los detenidos en el momento de ser llevados a prestar declaración, lo que muestra hasta que punto se ha extremado la nota.

El fenómeno no es por lo demás, aislado, ni se limita a la Capital, pues se repite en las Provincias. En Córdoba, en San Juan y en La Plata se han producido evasiones importantes, habiéndose fugado hace poco de la cárcel de encausados de esta última ciudad treinta y cuatro sujetos entre penados y procesados y de todos ellos sólo se han capturado cinco.

Ni siquiera el presidio de Ushuaia ha escapado a la regla, por cuanto del mismo se han fugado en los últimos meses del año pasado, cuatro delincuentes peligrosos.

En el mes de Enero del corriente año las autoridades de la Penitenciaría Nacional han descubierto y conjurado



una evasión, que seguramente en caso de no fracasar, habría sido la más importante consumada en nuestro país.

Los trabajos encerraban una novedad porque se ejecutaban desde afuera hacia adentro. Un túnel que partía de una casa vecina y que tenía al descubrirse los trabajos ya más de veinte metros, debía llegar hasta el penal y permitir la escapatoria de las personas allí encerradas.

Hasta ahora no se conocen ni los autores, ni las ramificaciones del plan en el interior del establecimiento.

Se observa, entonces, que como he dicho antes al factor impunidad por falta de aprehensión y por ausencia de condena de los aprehendidos, se une el de evasión que realizan los ya capturados, condenados o no y que se incorporan por sus propias fuerzas a la vida social de la cual debían ser segregados.

Una nueva preocupación tiene así que absorber a las autoridades consistente ésta en no permitir que los pocos aprehendidos y condenados en relación a los delitos ejecutados, se fuguen de los penales y demás sitios de seguridad donde se les detiene.

La estadística más o menos completa de evasiones sólo podría reconstruirse tomando los datos de la prensa diaria, por cuanto no se publican oficialmente.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires me ha proporcionado los datos correspondientes a ese Estado, los que se encuentran concretados en los cuadros que se insertan a continuación:



	Hechos	Autores probables	Aprehen- didos	No apre- hendidos
Año 1920	—	—	—	—
» 1921	—	—	—	—
» 1922	—	—	—	—
» 1923	25	34	18	16
» 1924	31	38	22	16
» 1925	18	18	9	9
» 1926	39	53	26	27
» 1927	43	61	36	25
» 1928	27	36	19	17
» 1929	39	58	37	21
» 1930	48	62	32	30
» 1931	63	80	49	31
» 1932 Ene- ro a Noviembre	32	36	13	23

En lo que respecta al año 1932 no se hace constar la evasión producida en la Cárcel de Encausados de La Plata el día 12 de Setiembre, por haberse avocado el procedimiento el Señor Juez del Crimen.

Resultan así 476 personas evadidas en el espacio de diez años y dentro de la Provincia. De éstas fueron aprehendidas 261 y no lo fueron 215. Si a estos resultados se agregan los de la Cárcel de Encausados, que no ha registrado la estadística anterior, tendríamos 510 evadidos de los cuales 266 se habrían aprehendidos y 243 no aprehendidos.

Del total de hechos especificando lugar o paraje corresponde a;



Edificio Público	233
Vía Pública	44
Otros sitios	72
Domicilio	7
Despoblado	7
Negocio	2

Infidelidad en la custodia de presos.

	Hechos	Autores probables	Aprehen- didos	No apre- hendidos
Año 1920	32	44	34	10
» 1921	27	29	23	6
» 1922	20	20	10	10
» 1923	6	6	6	—
» 1924	5	5	5	—
» 1925	5	5	5	—
» 1926	1	1	—	1
» 1927	—	—	—	—
» 1928	—	—	—	—
» 1929	—	—	—	—
» 1930	—	—	—	—
» 1931	4	8	5	3
» 1932 Ene- ro a Noviembre	13	13	8	5
Total	113	131	96	35



Lugar o paraje:

Edificio Público	66
Vía Pública	12
Otros sitios	33
Despoblado	1
Negocio	1
<hr/>	
Total	113

Las evasiones frecuentes acreditan falta de seguridad en los establecimientos o lugares destinados a encierro e insuficiencia o descuido por parte de las custodias. Y si a las dificultades para la aprehensión se añaden las facilidades para la evasión, el cuadro que presenta la defensa nula o escasa aparece en toda su peligrosa amplitud.

LA BENIGNIDAD DE LAS PENAS

Un concepto generalizado a fuerza de repetirse es el que afirma la benignidad de las penas en el código vigente y como consecuencia el aumento de la criminalidad y la insuficiente defensa social. En capítulos anteriores he demostrado que no existe el pretendido aumento de los delitos y he puesto en evidencia que el problema nacional en la lucha contra el crimen se encuentra en una zona distinta a la señalada por los observadores superficiales. El mal de la época es la impunidad y contra ella es preciso que se ejerciten todas las energías de las autoridades y se sumen todos los esfuerzos de las gentes honestas.

Las comprobaciones anteriores relegan a un segundo plano la discusión acerca de las penalidades existentes, desde que la impunidad significa eludir todo castigo y es inútil controvertir acerca de la cantidad de pena a imponerse a los delincuentes, cuando la mayoría de los criminales escapan a toda sanción. Esa discusión debe ser posterior al ajuste indispensable que coloque a la impu-





nidad con relación al castigo dentro de márgenes razonables.

De todas maneras sin embargo conviene afrontar el problema, aun cuando sea tan sólo para demostrar la falta de seriedad y de fundamento con que se formulan frecuentemente observaciones sin apreciar nada más que las apariencias, sin tener en cuenta factores personales y sin precisar el mal que no se observa en su verdadero lugar.

La crítica se limita a decir que las penas son benignas, pero no dice, ni ha dicho casi nunca de donde desprende el aserto, ni cuales son en concreto las disposiciones del código penal que debieran modificarse aumentándose los castigos.

Reconozco que en los hechos hay muchas veces benignidad, lo mismo que existe impunidad, pero lo primero no depende de la ley sino de los jueces y lo segundo no responde a deficiencias legales, sino a ineficacia de los encargados de descubrir, capturar, probar y guardar.

Un examen de los principales preceptos del código en la parte que prevé delitos y coloca penas, nos permitirá asegurar con mayor eficacia.

El homicidio en el código penal se encuentra castigado de la siguiente manera:

Homicidio simple: 8 a 25 años de reclusión o prisión, (artículo 79).

Homicidios calificados por su gravedad: Reclusión perpetua, (artículo 80).

Homicidios con circunstancias especiales: Reclusión de 3 a 6 años y prisión de 1 a 3 años, (artículo 81).

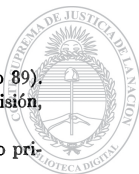


Puede así observarse que según los casos, un homicidio es susceptible de castigarse con un año de prisión o con reclusión perpetua.

La reclusión perpetua es la pena máxima que se puede encontrar en las legislaciones de los países civilizados que han suprimido la pena de muerte. Desde el momento en que se han eliminado de las leyes las penas que imponían sufrimientos corporales, como ser los azotes, tormentos, mutilaciones, etc. la pena más grave que permanece es la anteriormente mencionada. No puede así decirse que el código sea benigno para reprimir el homicidio que es el delito más serio en que pueda incurrirse, desde que lo castiga hasta con reclusión perpetua. Ahora como los homicidios son de diferentes especies debido a múltiples circunstancias que la ley reconoce, las penas tienen que ser fundamentalmente distintas, según los casos. No sería posible reprimir de la misma manera al que envenena a otro para heredarlo, al que quita la vida en pelea, o al que mata en un accidente de tráfico con el automóvil que guía. La ley ha debido tener en cuenta los matices y ha tenido que apreciar todos y cada uno de los distintos factores.

Cuando entendemos entonces que un homicidio ha sido castigado con una pena inferior a la que suponemos merecida por el autor del hecho, no puede imputarse el defecto a la ley, sino al magistrado. Este ha tenido en sus manos todos los elementos necesarios para reprimir y si no lo ha hecho no ha sido por deficiencia o inconvenientes del instrumento legal.

El código castiga las lesiones en la siguiente forma:



Simple con 1 mes a 1 año de prisión, (artículo 89).

Graves con 1 año a 6 años de reclusión o prisión, (artículo 90).

Más graves con 3 años a 10 años de reclusión o prisión, (artículo 91).

Por imprudencia con multa e inhabilitación, (artículo 94).

Observamos entonces que una lesión puede reprimirse con un mes de arresto, con una simple multa o con diez años de reclusión según el caso. La benignidad pretendida se producirá en los hechos, si se aplican los castigos pequeños destinados a los casos leves para los asuntos graves que tienen represiones de mayor importancia, pero no cuando los preceptos del código se usan conforme a su letra y con su sana interpretación.

El aborto se castiga con pena de reclusión o prisión desde 3 hasta 10 años (artículo 85) de manera que producido un delito de esa clase, el magistrado puede reprimirlo con prisión de tres años, con reclusión de diez o con cualquier pena intermedia entre esos dos extremos.

La privación de libertad, delito característico de los últimos tiempos, se reprime con prisión de 1 a 4 años, (artículo 141). Si la tal privación se ejercita sobre un menor de diez años, corresponde la pena de reclusión o prisión desde 3 hasta 10 años, (artículo 146).

El precepto del artículo 141 ha sido criticado sosteniéndose con motivo de los tres sensacionales secuestros en los cuales no se descubrieron a los autores, que la pena máxima de cuatro años de prisión era muy reducida para delitos de esa clase. Los que así opinaron incurrieron



en la superficialidad que he remarcado antes, pues únicamente consultaron el capítulo del código sobre privación de la libertad y no tuvieron en cuenta que la ley en la parte destinada a reprimir la extorsión, castiga con prisión desde tres hasta diez años al que detiene a otro para sacar rescate. Los delitos de la maffia no están regidos así por el artículo 141 sino por el 170. La crítica ligera que no se apercibió de lo preceptuado en el capítulo sobre extorsión ha pretendido que se aumentara una pena cuyo máximun supuso ser de cuatro años cuando era de diez, propiciando una reforma que ya estaba hecha.

El código penal reprime los delitos contra la propiedad en la forma que vamos a recordar.

Hurto simple: 1 mes a 2 años de prisión, (artículo 162).

Hurtos calificados: 1 año a 6 años de prisión, (artículo 163).

Quiere decir que en este delito, que es entre los atentados contra la propiedad, el más leve, se puede imponer según los casos, desde un mes hasta seis años de prisión.

Robo simple: 1 mes a 6 años de prisión, (artículo 164).

Robo con homicidio: de 10 a 25 años de reclusión o prisión, (artículo 165).

Robo en banda: de 3 a 10 años de reclusión o prisión, (artículo 166).

El robo, por consiguiente puede ser castigado, según los casos, con un mes de prisión o con diez años de reclusión.

Estafas y defraudaciones. — El castigo impuesto es el de 1 mes a seis años de prisión, (artículo 172). Los jueces deben graduarlo según los casos.



El código penal tiene para todos los delitos una escala elástica de penas con un **mínimum** reducido y con un **máximum** elevado, de manera que la benignidad posible en los castigos no sería la obra de la ley, sino de los hombres que la aplican.

A este respecto el código ha variado los criterios, acentuando una evolución que se ha notado en todas partes y por consiguiente en nuestro país.

El que toma el proyecto del Dr. Tejedor como base de estudio, observa que en ese conjunto, de acuerdo con los moldes de las viejas legislaciones, para cada delito se señala una pena fija, sin darle al juez margen alguno. El magistrado debe elegir entre absolver, o condenar a la sanción determinada. El margen sólo concurre en algunos casos marcándose un progreso sobre legislaciones anteriores en que aquél no existía y en que el código penal era como la tarifa de avalúos con una pena para cada hecho, sin dar lugar a ninguna adaptación que permitiera tener en cuenta circunstancias personales y sociales. El código que se sancionó a base del proyecto recordado, tiene cierta elasticidad, pero ella fué acentuada en los conjuntos posteriores teniendo en cuenta las comprobaciones científicas y las legislaciones de los demás países, desde que en todas partes se ha verificado la misma evolución. Para adaptar las penas a los hechos de la mejor manera posible, para la mayor justicia en las soluciones y la más acertada defensa social, no conviene medir a todos los sujetos con el mismo cartabón. Y como la ley no podría por muy extensa que fuera preveer todas las modalidades de los delitos que se cometen y



apreciar todas las circunstancias relativas a los autores, es preferible colocar penas elásticas, con márgenes amplios y dejar a los jueces la aplicación dentro de los mismos. Tal ha sido la tendencia del código penal argentino, la que consulta las más modernas conclusiones de la ciencia.

En nuestra ley se ha marcado también otra diferencia con relación a los antiguos criterios, la que no ha sido bien entendida todavía por algunos magistrados destinados a aplicarla.

El código, en la parte especial indica los delitos y señala las penas y en la parte general coloca entre otras cosas reglas relativas a la penalidad y a la manera de graduarla.

Para juzgar con acierto al acusado de un delito, es necesario considerar no sólo las circunstancias del hecho sino las personales del sujeto. Teniendo en cuenta ambos elementos, la solución consultará mejor la defensa social desde que tendrá especialmente en cuenta la peligrosidad del individuo.

Las leyes indican una serie de esas circunstancias y las clasifican como eximentes, agravantes y atenuantes. Las primeras imponen, cuando concurren la absolución del acusado; las segundas la agravación de la penalidad y las terceras la atenuación de la misma.

Antes de la reforma, nuestra ley indicaba esas circunstancias calificativas y disponía que en las penas divisibles por razón de tiempo o cantidad, el castigo correspondiente al delito debía ser el término medio, el cual se elevaría al máximum o se disminuiría al mínimum según el número y el carácter de aquellas circunstancias.



La elasticidad era entonces relativa desde que el magistrado se veía ceñido en su juicio por los preceptos relativos a término medio, número y carácter, sin contar con la amplitud necesaria.

En la ley actual se dispone, que en las penas divisibles por razón de tiempo o cantidad, (artículo 40) los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso, debiendo tenerse en cuenta (artículo 41):

- la naturaleza de la acción,
- los medios empleados para ejecutarla,
- la extensión del daño,
- la extensión del peligro causado,
- la edad,
- la educación,
- las costumbres,
- la conducta precedente del sujeto,
- la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir,
- la miseria,
- la dificultad para el sustento propio y de los suyos,
- las reincidencias,
- los antecedentes,
- los vínculos personales,
- la calidad de las personas, y
- las circunstancias que demuestren la mayor o menor peligrosidad.

El juez debe tomar conocimiento directo y personal del sujeto y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.



Pero el tribunal, juez o cámara no están obligados ni a contar las circunstancias, ni a partir del término medio. Si a su criterio, una sola circunstancia encierra gravedad suficiente como para imponer la aplicación del máximo puede hacerlo, sin tener más limitación que la de su buen juicio al respecto.

Quiere decir así que si se nota en los hechos benignidad, eso es una consecuencia de nuestro ambiente, del sentimentalismo de los magistrados o de otros factores, pero no de la ley.

La rutina que gravita en los tribunales y la jurisprudencia que se consulta a pesar de los cambios producidos en la ley, tiene su parte también en el fenómeno. Si los castigos previstos tienen márgenes muy amplios, el caso de la estafa por ejemplo en que la pena oscila entre un mes y seis años, la adopción del término medio en todos los casos trae consecuencias imprevistas para los que proyectaron la ley, desde que se iguala lo que se pretendió diferenciar. Si ese fuera el criterio, que fué lo remarco de nuevo el antiguo, para todos los casos de estafa habría que partir de una pena de tres años, que es el término medio entre un mes y seis años o sea setenta y dos meses. Primando esa manera de proceder a un acusado por una estafa de diez pesos en circunstancias simples le correspondería de entrada una pena de tres años, lo mismo que a un acusado por una defraudación de millones en condiciones de verdadera peligrosidad.

Insisto en que ese no es el criterio de la ley, la cual ha confiado en la sensatez de los jueces, atribuyéndoles facultades que antes no tenían para que hagan mejor justicia.



Las penas consignadas en la parte especial sufren transformaciones cuando concurre una circunstancia calificativa especial o sea la reincidencia. La repetición del delito es siempre un antecedente que debe tenerse en consideración como agravante para la graduación del nuevo castigo, como lo dice el artículo 41 del código penal. Pero la reincidencia en ciertas condiciones impone una agravación especial en la sanción correspondiente al caso.

El código desde luego, para evitar controversias acerca del alcance de la reincidencia y de su carácter específico o genérico, establece en el artículo 50 lo que se debe considerar como tal entre nosotros.

Es reincidente el que comete un nuevo delito, esto es el que ha sufrido cuando es sometido a proceso una condena anterior aunque haya mediado indulto o conmutación respecto a la misma. La condena anterior puede haber sido pronunciada por un tribunal del país o extranjero, no considerándose antecedentes los delitos políticos, los amnistiados y los militares.

Cuando un acusado ha sufrido dos castigos anteriores a más de dos años de prisión cada uno, la tercera condena debe ser cumplida en un paraje de los territorios del Sud o sea en el presidio de Ushuaia, (artículo 51).

La reclusión en Ushuaia debe hacerse efectiva por tiempo indeterminado en los casos que corresponda condena a un sujeto procesado por un nuevo delito, que tenga los siguientes antecedentes:

1º. — Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años;



2º. — Tres condenas a prisión por más de tres años o una a reclusión y dos a prisión de tres años o menos;

3º. — Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años; y

4º. — Cinco condenas a prisión por tres años o menos.

El objeto que se ha perseguido con esas disposiciones ha sido eliminar a los delinquentes habituales, reclusiendo por tiempo indeterminado a los sujetos que repiten los delitos aunque sean de poca gravedad.

La crítica que no siempre es sincera ni bien intencionada, llegó a sostener poco tiempo después de sancionado el código penal, que el mismo era tan inconsulto que castigaba con la misma pena o sea reclusión perpetua a quien asesinaba a toda una familia (caso de Mateo Bancks, citado para marcar el contraste) y a quien hurtaba dos zapallos.

El caso expuesto era sin duda monstruoso y el lector profano que percibía esa información con grandes títulos en un diario importante, experimentaba una impresión de asombro y su juicio sobre la competencia de los autores de la ley no podía ser amable.

¿Por qué se verificaba ese aserto?

Veamos.

No teniendo nuestro código pena de muerte, la reclusión más severa para el caso de homicidio, aun cuando las víctimas sean varias, es la de reclusión perpetua.

Por otra parte supongamos el caso de un sujeto, que comete un hurto y es castigado la primera vez con la pena de un mes de prisión, la que puede serle aplicada en forma condicional.



Incorre en un segundo delito de hurto también y se le condena a un año de prisión.

Insiste en su delito y sufre una tercera condena a dos años de prisión que es el máximo para los hurtos.

Comete un cuarto y un quinto delitos análogos y sufre en ambos casos, la pena mayor o sea dos años.

Ese sujeto documenta en su haber cinco delitos de hurto, habiendo sufrido en conjunto condenas sucesivas por siete años y un mes de prisión. Cumplidas esas sucesivas condenaciones, incurre en el hurto de objetos de poco valor y es procesado por la nueva infracción. La sociedad debe entender que es perjudicial y peligrosa la libertad de ese sujeto cuya actividad única la constituye el delito. Para defenderse, ante esas comprobaciones sucesivas e indubitables dispone, no una nueva y leve condena, sino una reclusión por tiempo indeterminado.

Ese es el caso criticado esta vez por exceso y no por benignidad.

El examen paciente y detenido de la ley documenta así que la benignidad afirmada es una leyenda análoga a la del aumento de los delitos.

No obstante todo esto, como debemos preocuparnos siempre del mejoramiento de las instituciones existentes considero que sería sensato examinar científicamente la jurisprudencia, y los fenómenos sociales producidos en la última década, para ver si conviene la modificación de algunas represiones. Pero eso sí, después de ajustados los resortes flojos y de acreditar que se ha conjurado la impunidad en la medida de lo posible.

CONMUTACIONES E INDULTOS

La crisis de la represión se agrava con las concesiones excesivas de indultos y conmutaciones de pena.

Como un recuerdo de las prerrogativas omnimodas atribuidas a los jefes de estado en los regímenes autocráticos se conserva en todas partes la facultad de la autoridad ejecutiva para perdonar. Este perdón se ejerce remitiendo totalmente la pena impuesta por los jueces o disminuyéndola. La remisión completa se llama indulto y la transformación de la condena por otra inferior en grado conmutación.

Desde que no puede suponerse la existencia de instituciones que tiendan a imponer la injusticia, debemos entender que la facultad de perdonar se confiere para que el rigor de casos excepcionales se modere y las soluciones definitivas sean más equitativas. Dentro de un régimen judicial y legal perfectos el perdón entrañaría un atentado desde que crearía desigualdades apoyadas en el capricho de las personas. Pero considerando la imperfección de los hombres y las instituciones, el derecho ejecutivo de remitir sanciones penales, puede corregir excesos derivados de la ley o de los magistrados que la aplican.





Antes de la sanción del código penal vigente se dió el caso de jueces, que después de haber condenado al acusado se dirigieron espontáneamente al Poder Ejecutivo pidiendo la conmutación de la pena impuesta. Consideraban al proceder en esa forma que la rigidez de la ley y sus preceptos excesivos habían obligado a condenas que por su monto no guardaban relación con los hechos incriminados.

Con el sistema del código actual que presenta márgenes de penalidad tan amplios, con penas mínimas reducidas y máximas elevadas para el mismo delito, las probabilidades de error se reducen. El juez no se encuentra ya ceñido para pronunciar una condena a pena determinada, o una absolución, pues cuenta con una escala que le permite apreciar todos los matices del caso sometido a su decisión y cada una de las circunstancias particulares del sujeto acusado. En esas condiciones la condena que debe ser justa, hace cada vez menos necesario el empleo del perdón.

El abuso en las conmutaciones e indultos ha sido notorio bajo determinados gobiernos, tanto en la Nación como en las provincias habiendo existido una verdadera industria con relación a los perdones. Los decretos respectivos dictados en todas las épocas del año y comprendiendo a veces a muchos penados, no se daban a la publicidad ignorándose las peligrosas rectificaciones que se hacían a las sentencias condenatorias. Los informes de los tribunales que aconsejaban siempre no acordarlas se desoían introduciéndose un nuevo elemento de perturbación en la defensa social y agravando el problema de la impunidad.



En la Provincia de Buenos Aires donde la Constitución exige el envío de la copia de los decretos sobre conmutaciones a la Asamblea Legislativa y la ley su publicidad, se han omitido una y otra cosa, como si esas resoluciones debieran esconderse. La imposición de comunicar a la Legislatura los testimonios de los decretos se ha cumplido durante los gobiernos de Don Juan Ortiz de Rosas y de Don Marcelino Ugarte, en las épocas en que desempeñé como titular o interinamente la cartera de gobierno.

Actualmente hay mayor regularidad y las medidas extraordinarias de perdón se han reducido de manera notoria.

La conmutación y el indulto, casi innecesarios con el código vigente, deben limitarse a casos de excepción, tenerse en cuenta al considerarlos el informe de la justicia y publicarse cuando se conceden. De lo contrario la impunidad tendrá en ese factor un nuevo y poderoso aliado.

Las cifras de los perdones acordados en la provincia de Buenos Aires no se conservan en ninguna oficina. La policía que lleva una estadística cuidadosa no ha podido tomar esos números, a causa de que las órdenes de libertad en los casos de perdón, se libran directamente a los establecimientos donde se alojan los reos para que se hagan efectivas.

Para poder ofrecer los números de conmutados e indultados, sería necesario hacer una revisión prolija y larga examinando los decretos en los expedientes respectivos y eso sólo podría disponerse por las autoridades



ocupando personal durante un tiempo que no sería corto.

En la Capital Federal tampoco se publica esa estadística, no existiendo según mis informes, libros especiales donde se registren los decretos relativos a remisión o disminución de condenas.

El Inspector General de Justicia, Doctor O'Connor, ha tenido la deferencia de disponer la búsqueda y de proporcionarme el cuadro de los perdones acordados en lo federal desde el año 1920. Los números que recién ahora se conocen son realmente reveladores del orden o del desorden gubernativo y de la colaboración de las autoridades en la represión o en el favorecimiento de la impunidad.

Observemos las cifras de los indultos concedidos.

Año 1920	139
» 1921	139

Corresponden esos años a los dos últimos de la primera presidencia del Señor Irigoyen, sumando 278 los indultos acordados.

El año 1922 se concedieron 93 indultos, bajo las presidencias del Señor Irigoyen y del Dr. Alvear y durante el periodo de este último se otorgaron los siguientes:

Año 1923	48
» 1924	66
» 1925	67
» 1926	51
» 1927	55



El número total en cinco años alcanza a 287 indultos o sea nueve más en ese término de los que acordó la presidencia anterior en sólo dos años.

En 1928 o sea en un periodo que corresponde a las dos presidencias o sea a la del Dr. Alvear y a la segunda del Señor Irigoyen se concedieron en total 54 indultos.

En 1929 no se acordaron y en 1930 se favoreció con el perdón a 166 condenados.

El gobierno provisional en el año 1931 acordó solamente 16 indultos y el gobierno del General Justo en 1932, el reducido número de 17.

En el corriente año de 1933 y durante los meses de Enero y Febrero, se ha acordado solamente un indulto.

Estas cifras demuestran de una manera bien clara, cuando se ha usado de una facultad y cuando se ha abusado de la misma.

En materia de conmutaciones se nota el mismo fenómeno o sea el aumento durante los periodos de gobierno del Señor Irigoyen, el aminoramiento en el periodo del Dr. Alvear y la mesura tanto del gobierno provisional como del presente.

NUMERO DE CONMUTACIONES

Año 1920	183
» 1921	228
» 1922	119
» 1923	12
» 1924	17



Año 1925	12
» 1926	10
» 1927	34
» 1928	31
» 1929	—
» 1930	219
» 1931	—
» 1932	2
» 1933	6

De los informes anteriores resulta que en los años 1920 y 1921 correspondientes a la primera presidencia Irigoyen, se acordaron 589 gracias en forma de indulto o conmutación. Si se comparan esos números con los del censo carcelario actual, resulta que las cárceles nacionales habrían sido entonces aligeradas en más de una tercera parte de los penados.

En 1922, año en que correspondieron nueve meses y días al Señor Irigoyen y poco más de dos meses al Dr. Alvear, se acordaron 212 gracias.

Durante cinco años de la Presidencia de este último o sean 1923, 1924, 1925, 1926 y 1927 se favoreció a 372 penados.

En 1928 o sea el último año de la presidencia Alvear y el primero del segundo periodo del Señor Irigoyen el número fué de 85.

Durante los años 1929 y 1930 la presidencia Irigoyen acordó 385 indultos y conmutaciones.

El gobierno del General Uriburu concedió en conjunto 16 y el del General Justo 26, incluyendo los meses de Enero y Febrero de 1933.



Puede afirmarse así con los datos estadísticos, que el abuso ha desaparecido después de la revolución y que hoy de cuando en cuando se usa la facultad de perdonar, mitigándose con las correspondientes resoluciones, las condenas impuestas conforme a los preceptos del código penal en vigor.

Las conmutaciones y los indultos cuando no se refieren a casos excepcionales, agravan la inseguridad social y contrarian la corriente afirmación respecto a la benignidad del sistema represivo vigente. Si las penas no fueran bastantes, como se dice, sería sin duda inconveniente reducirlas más o eliminarlas por medio de disposiciones ejecutivas.

La crisis de la represión caracterizada por la impunidad de los delitos resultaría agravada con la intervención de ese factor ajeno a la ley de fondo.

En los primeros días de Febrero del corriente año 1933 se ha publicado la noticia de los últimos perdones acordados por el Poder Ejecutivo, en contra de la opinión de los magistrados del fuero criminal que informaron en las causas.

Se trata de los siguientes casos:

Julia L. J. condenada a seis años de prisión y accesoria de reclusión por tiempo indeterminado a causa de repetidos hurtos, fué favorecida con el indulto.

La accesoria de reclusión por tiempo indeterminado se ha colocado en el código penal para los reincidentes que se consideran incorregibles, dado el número de delitos cometidos por los mismos. No parece acertado por eso ni concordante con la propaganda que se hace contra



los profesionales del delito, la liberación sin restricciones de un reincidente y menos cuando se propician modificaciones legales que tienden a reprimir, no ya al que reitera infracciones sino a quien se encuentra en estado peligroso.

Lucía C. condenada a prisión perpetua por infanticidio, obtuvo reducción de la pena a quince años de prisión. Se trataba de un caso de filicidio por estrangulamiento, no habiendo comprendido a la condenada el precepto que reduce la pena cuando la muerte del hijo se ha ejecutado para ocultar la deshonra, porque la mujer en cuestión ya había tenido antes dos hijos naturales.

María V. condenada a prisión perpetua también por la muerte de un hijo, obtuvo reducción de la condena a quince años de la misma pena.

Emilia F. de C. condenada a veinte años de prisión, obtuvo cuatro años de reducción en su condena. La penada había dado muerte a golpes de cepillo a una hija de quince años porque ésta en un día de carnaval jugaba con agua. En el proceso se comprobó que la mujer en cuestión maltrataba habitualmente a la hija antes del asesinato.

María M. L. condenada a seis años de prisión, ha obtenido la remisión de cuatro años sobre la pena impuesta, la que ha quedado así reducida a dos.

José A. R. condenado a quince años de prisión por homicidio, fué beneficiado con una reducción de nueve años, quedando la pena rebajada a seis.

En este mismo mes de Febrero se han acordado nuevas gracias por el Poder Ejecutivo,



Se trata de los casos siguientes:

Domingo C. condenado a nueve años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio, abuso de arma y lesiones, obtuvo reducción de la pena impuesta a seis años.

Pascual A. condenado a tres años de prisión por daño intencional y lesiones, es conmutado disminuyéndose la mitad de la condena impuesta.

Angel T. condenado por homicidio obtuvo dos años de reducción de la pena impuesta. En todos estos casos los tribunales aconsejaron el rechazo de las concesiones solicitadas. El número de perdones, ha sido con todo, bien reducido, habiéndose acordado los cuatro últimos, con motivo del primer aniversario del gobierno. Los casos anotados entran dentro de los números insertos antes.

Como puede observarse los factores que contribuyen a la crisis de represión son diversos y ha existido una colaboración general para agravarla.

El ajuste de los resortes debe hacerse por eso en todos los órdenes para conseguir lo que se reclama en homenaje a la tranquilidad general o sea la cesación de la impunidad por el castigo del delito.



LOS REMEDIOS NECESARIOS



Las observaciones de los capítulos precedentes comprueban que son de distinta índole las medidas que deben adoptarse para mejorar las condiciones sociales y defenderse del crimen. Unas tienen que ser administrativas y otras legislativas. Para el éxito de las primeras se requiere plan, unidad de acción en la Capital y en las Provincias y línea de conducta firme. Para las segundas se necesitan varias leyes, algunas de verdadera urgencia.

La autoridad administrativa se encuentra frente a tres problemas que los hechos ponen de manifiesto: la impunidad por falta de aprehensión de los delincuentes; la defensa insuficiente de los agentes de seguridad y la evasión de los detenidos en los distintos establecimientos destinados al encierro de los mismos.

Los medios para conjurar esos inconvenientes no pueden consistir sólo en acción con los elementos actuales, sino también en mejoramiento de las condiciones con que cuentan los guardianes del orden público.

En los últimos tiempos se ha notado una preocupación para dotar a estos últimos de elementos modernos para



la defensa y el ataque, pero seguramente lo hecho con el concurso del Estado y de los particulares no ha sido suficiente.

Entre nosotros la policía desempeña funciones varias que en otras partes se encuentran entregadas a diferentes reparticiones. En la Capital Federal, es un auxiliar de la justicia de instrucción cooperando con la misma en la formación de los sumarios, es la encargada de velar por la seguridad pública, es el juez de faltas y contravenciones y es la ejecutora de ordenanzas y edictos municipales. Bajo este último aspecto, la sola dirección del tráfico absorbe muchas de sus actividades.

La policía depende así de tres autoridades distintas: del Poder Ejecutivo, de los jueces y de la Municipalidad.

El personal de la misma no ha aumentado en relación a la complejidad de sus funciones y al incremento de la población. La situación de sus empleados superiores llenos de obligaciones y de acechanzas tampoco ha cambiado en proporción a las circunstancias.

Se impone así una revisión en esta materia para colocar al organismo en las condiciones de eficiencia necesaria. Proporcionado el personal preciso y los elementos indispensables para la defensa, podrá exigirse el máximo de eficiencia y será posible ajustar las maltrechas mallas de donde hoy se escapan los delincuentes en proporción tan crecida.

Administrativamente se requiere así una policía suficiente, provista y segura para que disminuya con su acción constante la impunidad en la represión de los delitos.



Eso es lo primero, ya que, como lo he repetido antes para que un sistema penal cualesquiera no fracase, es preciso que los delitos se repriman, capturándose a los autores, sometiéndose a los encargados de juzgarlos y haciendo cumplir las sanciones impuestas en las sentencias de los magistrados.

Estas tareas no sólo corresponden a la Nación, sino a cada una de las provincias.

Bajo el aspecto legislativo es preciso que se sancionen las leyes complementarias del código penal cuyo alcance ha sido ya explicado, dotando al país de los siguientes estatutos:

Registro Nacional de Reincidentes, con una sección destinada a la Estadística criminal en todo el país;

Sistema carcelario con la creación de la Dirección General de Establecimientos penales, que vele por el cumplimiento uniforme de las penas en todo el territorio de la República;

Construcciones carcelarias para crear los establecimientos adecuados y reemplazo de la Penitenciaría Nacional de la Capital con un establecimiento destinado a reclusión y prisión, que deberá levantarse cerca de la Capital con los recursos que proporcione la venta de los terrenos que se encuentran ocupados por el penal de la calle Las Heras;

Requisitos para la entrada de extranjeros, inmigrantes o no, ciudadanía, residencia y expulsión de aquéllos, por acción ejecutiva dentro de ciertos términos y judicial en los demás;

Patronato de liberados;



Legislación de faltas, especialmente la vagancia y mendicidad.

Código de Procedimientos en lo criminal y correccional con formas rápidas de sustanciación, que permitan la terminación definitiva de las causas en un término máximo de un año.

Todas estas medidas asegurarían la defensa social del país y atacarían el problema en su propio centro, sin derivarlo a regiones donde no se encuentra el eje de la cuestión.

La reforma del código penal con introducción de nuevas penas y aumento de las actuales no modificaría en nada la situación existente, desde que con esos cambios no se obtendría lo que se necesita en primer lugar o sea la captura de los delinquentes y su mantenimiento en seguridad.

No quiere esto decir que considere intangible al Código Penal. Ese conjunto legislativo lleva ya diez años de vigencia y en su aplicación se pueden haber notado sus deficiencias y sus ventajas. Un estudio reposado y serio sería conveniente para concertar las modificaciones impuestas por las circunstancias actuales.

El Poder Ejecutivo de la Nación por decreto de 25 de Julio de 1923 designó una comisión encargada de preparar los siguientes trabajos legislativos:

- A) **Ley sobre sistemas o régimen carcelario.**
- B) **Ley sobre construcción de establecimientos carcelarios.**



- C) Ley sobre creación y organización del Registro Nacional de Reincidentes.
- D) Ley sobre creación y organización de patronato de vigilancia y asistencia de liberados.
- E) Ley sobre medidas de seguridad, relativas a la vagancia y mendicidad voluntaria, a la ebriedad y la demencia.

Por decreto de 8 de Octubre de 1926 se encargó a esa comisión compuesta de los Dres. Ricardo Seeber, Juan P. Ramos, Eusebio Gómez, Nerio Rojas, Carlos de Arenaza y Rodolfo Moreno (hijo) la preparación de los siguientes proyectos:

- 1º. — Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional.
- 2º. — Código de Menores.
- 3º. — Código de Faltas y Contravenciones.
- 4º. — Ley orgánica de tribunales en las materias que comprenden los anteriores enunciados.
- 5º. — Ley de creación y organización de la Policía Judicial.

La comisión mencionada presentó al Poder Ejecutivo un primer proyecto sobre estado peligroso, el que tendía a la modificación del título del código penal sobre reincidencia. Ese proyecto que fué enviado al Congreso



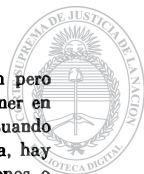
acompañado de una exposición de motivos que redactó el Dr. Ricardo Seeber, fué modificado por la misma comisión cuando se integró con otros componentes y el nuevo articulado que comprendía los casos de estado peligroso con delito fué también remitido al Poder Legislativo.

Posteriormente la comisión preparó un proyecto de estado peligroso sin delito que también se mandó por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Los trabajos de esa Comisión sometidos al parlamento no fueron considerados por éste y el organismo creado por el gobierno del Dr. Alvear dejó de funcionar sin haberse dictado ninguna medida al respecto cuando se inició el del Señor Irigoyen.

Los gobiernos posteriores no intentaron reunir de nuevo a la Comisión, ni recordaron la existencia de la misma, pero el proyecto ejecutivo sometido hoy al Congreso sobre reformas al código penal ha tomado sus disposiciones del trabajo hecho por aquel organismo acerca de estado peligroso de los delincuentes.

Lo que procedería para llevar a término una labor seria y meditada sería poner en movimiento los decretos de la presidencia Alvear y procurar que la Comisión, con o sin sus componentes anteriores, ya que la cuestión no es de hombres sino de instituciones, diera término al trabajo encomendado el que comprendía un vasto plan de acción capaz de prestigiar, en caso de consumarse a cualesquier gobierno, el cual exhibiría en su haber una obra tan provechosa como necesaria.



Hay por último un factor que todos señalan pero que no siempre se considera cuando se debiera tener en cuenta. Me refiero a los magistrados judiciales. Cuando se controvierte acerca de las leyes y de su eficacia, hay quienes sostienen que todos los estatutos son buenos o malos según quienes sean los llamados a aplicarlos. La cuestión no es de leyes, agregan, sino de hombres. Hay en cambio quienes con principios más formulistas y menos elásticos, entienden que con buenas y previsoras leyes, los hombres que deben aplicarlas son elementos secundarios.

He creído siempre que la concurrencia de los dos elementos es indispensable para la buena marcha de un país. Las leyes deben ser claras, previsoras y capaces de resolver los problemas que abordan y los hombres encargados de aplicarlas deben tener capacidad, corrección y criterio.

Si en alguna materia es preciso que los magistrados estén rodeados de todas las garantías necesarias, es en la represiva. Los jueces de instrucción y de sentencia, tienen en su poder el honor, la propiedad, la vida misma de las personas. Los derechos individuales más preciados pueden estar en manos de esos magistrados, los que deben por eso tener un conjunto de condiciones que permitan sin peligro hacerlos depositarios de las facultades que se les confieren.

Un juez que cede a la influencia del que manda, que procede creyendo interpretarlo en la persecución del adversario, que no es capaz de amparar al que tiene derecho por el derecho mismo y que se aparta de la senda



de la ley bajo la gravitación de factores ajenos a la misma, suele ser más peligroso que los delincuentes a quienes condena.

Un juez que actúa bajo la influencia de factores extraños y a quien no lo detiene el honor ajeno, cuando se trata de servir al poderoso, es más despreciable que un asaltante y más pernicioso que un pistolero.

Un juez que varía de opiniones en perjuicio de personas sometidas a su jurisdicción, por temor, servilismo, ofrecimientos o promesas, carece de autoridad para ejercitar funciones tan delicadas.

Un juez requiere tener moral pública y privada, antecedentes claros e intachables, vida limpia y honesta bajo todos los aspectos de sus actividades anteriores a la magistratura.

Un juez honorable puede equivocarse, pero cuenta aún en el error con el concepto que no alcanzan sino en sentido contrario los que debieran ser reos y no juzgadores.

Cuiden los gobiernos si quieren hacer patria los nombramientos judiciales y desechen, a pesar de las influencias y de los sentimentalismos, a los que aparecen como discípulos humildes ante los maestros poderosos pero que son judas entregadores cuando pasa la prosperidad y sobreviene la desgracia.

INDICE



	Pág.
I — La opinión pública y las sanciones legislativas.	9
II — Elaboración del Código Penal argentino	17
III — Las leyes complementarias del Código Penal ...	27
IV — Los proyectos	37
V — La estadística criminal	53
VI — Modalidades de las reformas.— El examen de las causas	59
VII — Las nuevas formas del delito. Sus causas	67
VIII — La impunidad de los delitos	77
IX — La cuestión de la pena de muerte	91
X — La prescripción penal y la lentitud de los pro- cesos	105
XI — La reforma procesal	117
XII — Los focos de la mala vida	125
XIII — Las evasiones	135
XIV — La benignidad de las penas	141
XV — Conmutaciones e indultos	153
XVI — Los remedios necesarios	163